



GACETA DEL CONGRESO

SENADO Y CÁMARA

(Artículo 36, Ley 5ª de 1992)

IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA

www.imprenta.gov.co

ISSN 0123 - 9066

AÑO XXX - Nº 1521

Bogotá, D. C., viernes, 22 de octubre de 2021

EDICIÓN DE 23 PÁGINAS

DIRECTORES:

GREGORIO ELJACH PACHECO

SECRETARIO GENERAL DEL SENADO

www.secretariasenado.gov.co

JORGE HUMBERTO MANTILLA SERRANO

SECRETARIO GENERAL DE LA CÁMARA

www.camara.gov.co

RAMA LEGISLATIVA DEL PODER PÚBLICO

CÁMARA DE REPRESENTANTES

PONENCIAS

PONENCIA PARA PRIMER DEBATE AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 152 DE 2021 CÁMARA

*por medio del cual se dictan disposiciones para incentivar alivios para empresas
y contribuir a la reactivación económica..*

**PONENCIA PARA PRIMER DEBATE AL PROYECTO DE LEY NO. 152 DE 2021
CÁMARA "POR MEDIO DEL CUAL SE DICTAN DISPOSICIONES PARA
INCENTIVAR ALIVIOS PARA EMPRESAS Y CONTRIBUIR A LA REACTIVACIÓN
ECONÓMICA"**

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 150, 153 y 156 de la Ley 5ª de 1992 y en atención a la designación efectuada por la Mesa Directiva de la Comisión Tercera Constitucional Permanente de la honorable Cámara de Representantes, nos permitimos presentar el informe de ponencia para primer debate al Proyecto de Ley No. 152 de 2021 Cámara, "Por medio del cual se dictan disposiciones para incentivar alivios para empresas y contribuir a la reactivación económica".

1. TRÁMITE Y ANTECEDENTES

El presente proyecto de ley es de iniciativa parlamentaria y fue presentado el día 28 de julio de 2021 ante la Secretaría General de la Cámara de Representantes por los honorables representantes Catalina Ortiz Lalinde, Armando Zabaraín De Arce y Christian José Moreno Villamizar.

Este proyecto tuvo una primera radicación el día 25 de marzo de 2021 (Proyecto 567 de 2021C) por los honorables representantes Catalina Ortiz Lalinde, Armando Antonio Zabaraín D'Arce y John Jairo Cárdenas Morán; el cual fue presentado con ponencia positiva para primer debate en la Gaceta N. 529 de 2021, pero se debió radicar nuevamente por tránsito de legislatura.

El nuevo proyecto de ley es remitido a la Comisión Tercera Constitucional de la Cámara de Representantes por tratarse de asuntos de su competencia y la Mesa Directiva, mediante comunicación electrónica oficial del 11 de octubre de 2021, luego de un proceso de desacumulación, nos ha designado como ponentes para primer debate; para lo cual rendimos ante su Despacho la ponencia a primer debate del presente proyecto 152 de 2021 - Cámara.

2. OBJETO DEL PROYECTO

Este proyecto de ley tiene como principal finalidad el contribuir al proceso de reactivación económica del país. Entendiendo esta situación como un asunto complejo de alto interés público y de relevante relación con otras problemáticas, tales como la pobreza o la salud individual; la reactivación económica se convierte entonces en esa meta necesaria y trazada por el Gobierno para recuperar a largo plazo una senda económica de crecimiento que permita mitigar los problemas públicos de mayor importancia.

Vale la pena, pues, comenzar definiendo el concepto de reactivación o recuperación económica, el cual según diversos organismos multilaterales (entre éstos el Banco Mundial) es definido como el proceso mediante el cual un individuo -en este caso el país colombiano- supera positivamente un estado de dificultad económica causado por un choque o crisis; situación que se traduce posteriormente en retornar al estado anterior a dicho acontecimiento. Tanto las Naciones Unidas como la Unión Europea, el

Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, son enfáticos en que cada país debe definir con claridad la variable o forma de medición a través de la cual se entenderá, pues, que un país ha superado con éxito el proceso de reactivación.

Para esto, expertos en la comunidad internacional sugieren, dependiendo del objetivo de cada país, tomar variables relacionadas con la actividad económica: producción, producto interno bruto, mercado laboral, informalidad, tejido empresarial y demás. Para los efectos de este proyecto de ley y siguiendo las recomendaciones dadas por el Banco Mundial en sus distintos informes al respecto de la pandemia por el COVID-19, las variables principales para la reactivación bajo este proyecto serán el tejido empresarial y el mercado laboral, entendidas éstas como herramientas para la superación de crisis económicas y de pobreza en contextos de emergencia.

3. PROBLEMA GENERAL A RESOLVER

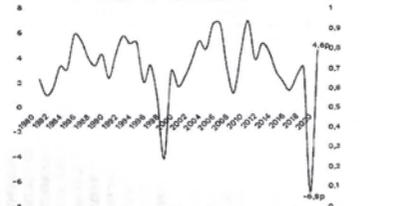
Es claro que, como definición de problema de política pública, el asunto general a contribuir en su solución es la superación de la crisis económica y social ocasionada por el COVID-19, que a su vez como problema específico al cual apunta este proyecto de ley es el permitir generar incentivos para que las empresas sean protagonistas y partícipes de este proceso de superación, pues existe actualmente un riesgo de que las empresas no tengan el ecosistema necesario para lograrlo.

3.1 Consideraciones generales

3.1.1 Panorama económico y mercado laboral

En primer lugar, es de conocimiento público que el país fue sumamente afectado por la pandemia generada por el COVID-19, y que además nos encontramos saliendo de una de las crisis económicas más difíciles por las que alguna vez haya cruzado el país. Según el informe de política monetaria del Banco de la República para enero del 2021, la economía tuvo una caída del 7.2% del PIB en el 2020 y se espera que el 2021 tenga un crecimiento con un pronóstico del 4.6% bajo una inflación máxima del 3%. Esta senda de crecimiento se puede ver en los datos aportados por el CONPES 4023 de 2021 en la gráfica 1.

Gráfica 1 – Senda de crecimiento económico real (p)



Fuente: Penn World Tables 9.1, MHP y Fedesarrollo
Nota: Precios constantes del 2011
Fuente: datos aportados por el CONPES 4023 de 2021.

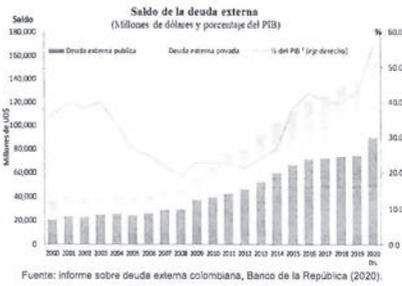
Haciendo énfasis en este crecimiento, se puede evidenciar no sólo la consecución de un choque o crisis económica, cumpliéndose la definición conceptual aportada por el Banco Mundial para definir el hecho causante de la posterior necesidad de reactivación económica; sino que se debe notar que éste debe pasar por un efecto rebote de la economía que se espera se efectúe en 2021 y 2022.

Sin embargo, aunque la expectativa de efecto rebote por parte del Gobierno Nacional es ambiciosa, ésta podría no cumplirse sin los incentivos necesarios a la economía y al mercado laboral y, por tanto, podría no llegarse pronto al punto de partida en el que se encontraba el país antes del inicio de la pandemia. Nótese que el país está en un déficit muy alto, pues se venía con un crecimiento económico entre el 2% y el 4% del PIB (llegando en algunos cortos períodos al 6%), mientras que por la pandemia se bajó tempestivamente a casi un -8% por una caída de 6.9 puntos porcentuales (en lo cual, además, según datos del FMI, la caída sería en realidad del -8.2%). Tal y como lo reconoce el CONPES 4023 de 2021, esta meta de crecimiento económico puede cumplirse siempre y cuando se generen medidas coyunturales de apoyo en distintos frentes de la economía, especialmente para lo que respecta a este proyecto de ley, en el tejido empresarial y el mercado laboral.

Por su parte, es importante considerar la afectación a la sostenibilidad fiscal y en general a las finanzas públicas que los gastos de la pandemia han causado para el país. Por ejemplo, las mismas proyecciones efectuadas por el Banco de la República y el CONPES, en especial para el gasto del Gobierno Nacional Central (GNC), se encuentran en este momento en un período de alto déficit que, se espera, vaya recuperándose a medida que pase el tiempo y por supuesto se efectúen medidas de reactivación económica.

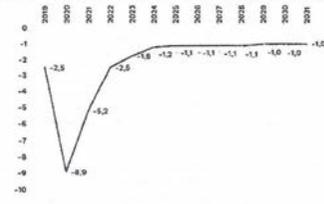
En ese mismo sentido, se tiene que el déficit del GNC según datos del DANE redondeó una deuda neta para el 2020 en 84.4% del PIB, esperando que se reduzca al 42.2% en diez años. Esto se puede evidenciar en la Gráfica 2, en donde se observa la senda que ha recorrido la deuda externa (nótese el saldo público para 2020) en millones de dólares.

Gráfica 2 – Saldo de la deuda externa en millones USD – 2000/2021



Sobre este tema, resulta finalmente relevante observar la senda de recuperación que se trazó el Gobierno frente a la revisión del MFMP para el Gasto Nacional Central considerando la crisis actual. En la Gráfica 3 se puede observar que el Gobierno espera tener una recuperación efectiva para el 2024, siempre y cuando se logre materializar un flujo económico dentro del tejido empresarial y el mercado laboral que, se insiste, son el principal fundamento y justificación de este proyecto de ley.

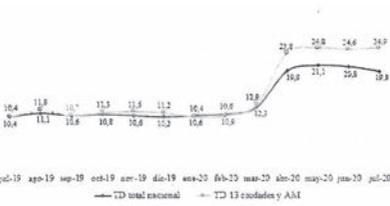
Gráfica 3 – Senda del déficit para el GNC según el MFMP (% PIB)



Otra variable importante para considerar el actual problema por el que atraviesa el país es el mercado laboral. Según los Informes del DANE, durante el 2020 la tasa de desempleo llegó a los picos más históricos, ubicándose en un 24.9% nacional en julio y generando una brecha todavía mayor para hombres (16.2%) y mujeres (26.2%). Gracias al retorno de distintas actividades y sectores comerciales posterior a los cierres y medidas restrictivas en torno a la movilidad y al comercio, se comenzó a recuperar levemente el empleo en el país ubicándose, para enero de 2021, en una TD del 17.3%, una TGP del 60.1% y una TO de 49.8%, reduciéndose lentamente durante los meses hasta la actual cifra de desempleo (15.8%) para mayo de 2021. No obstante, de nuevo en comparación con los mismos períodos del 2020, se encuentra que sigue habiendo una afectación considerable en estos indicadores, pues para el año anterior la TD había sido de 13%, la TGP del 62.5% y la TO del 54.4%. Valga decir que, haciendo una mirada en las distintas regiones del país, resulta todavía más alarmante que 13 ciudades capitales, incluidas Bogotá y Cali, están por encima de la tasa de desempleo nacional para enero de 2021; y para mayo continúan algunas ciudades capitales por encima de esta cifra. Departamentos como Chocó, Huila, Tolima, Norte de Santander, Huila, Meta, Putumayo, Vichada y la Guajira han sido sumamente afectados por esta situación.

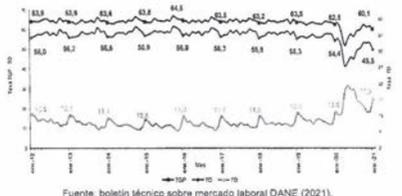
Si se observa esta senda de desempleo hasta el pico en julio (Gráfica 4), se puede encontrar una clara relación entre el inicio de las cuarentenas y la pandemia (marzo de 2020) con el aumento coyuntural del desempleo.

Gráfica 4 – TD desestacionalizada mensual – Jul. 2019 / Jul. 2020



Si se da una imagen mayor en series desestacionalizadas anuales (Gráfica 5), se encuentra que 2020 fue el año con mayor desempleo y, además, fue diciembre de 2020 un mes crucial para definir la trayectoria de empleo para el 2021.

Gráfica 5 – TD, TGP y TO desestacionalizadas anuales – Ene. 2012 / Ene. 2021



3.1.2 Tejido empresarial y afectación por el COVID-19

Ahora bien, sobre la afectación a las empresas, es importante considerar en primer lugar la relación existente entre la pobreza y el empleo. Expertos de la comunidad académica en torno a la economía del desarrollo han estudiado profundamente el fenómeno de las trampas de pobreza asociado a diferentes niveles (individual, hogar, comunitario, regional y hasta nacional). Aunque el objetivo de este proyecto no es directamente el contribuir al propósito de mitigar los riesgos de vulnerabilidad asociados a estas trampas, vale la pena mencionar que diferentes estudios de impacto de políticas estatales enfocadas en apoyo a empresas y generación de empleo han demostrado una efectividad a largo plazo muy amplia en la reducción de los índices de vulnerabilidad en el país.

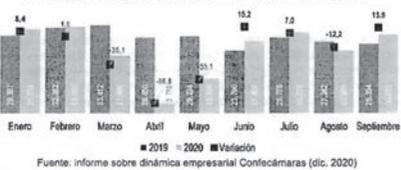
Es en este sentido en que recae el presente proyecto, pues ante una situación tan problemática para el tejido empresarial en donde claramente los ingresos de las personas producto de sus trabajos se ve sumamente afectado; se hace por ende necesario generar medidas a través de este proyecto de ley para incentivar a que las

empresas renazcan o se fortalezcan y tengan un ecosistema favorable para poder operar de mejor manera durante los próximos tres años.

Sobre esta situación, vale la pena iniciar mencionando que la pandemia afectó especialmente a unos sectores más que a otros. Según un estudio de la Universidad de los Andes, se calculó que apenas para abril del 2020 ya se habían perdido más de 5.3 millones de puestos de trabajo. En suma, incluso en ese mes ya se había presentado una caída de la productividad y los ingresos de sectores, dando un 30% en industrias manufactureras, 90% para industrias del turismo y 60% para servicios de comercio al por menor y otros, incluyendo restaurantes y locales. No por nada el DANE, en un comunicado efectuado a inicios de 2021, manifestó que la pandemia había dejado una pérdida de 10 años de avance en políticas de empleo. A pesar de la recuperación que ha ido teniendo el país, el saldo final que dejó el 2020 fue de 2.4 millones de empleos perdidos en comparación al 2019, y un total de 9.2 millones de personas ocupadas. De acuerdo con la Encuesta de Micronegocios del DANE, para el 2019 existían 5,874 millones de micronegocios y para el 2020 pasaron a existir 5,3 millones. Esto representa una destrucción de, al menos, 500,000 empresas.

Esto último compagina con el informe de creación de empresas en Colombia publicado por Confecámaras, que indicó que en el primer semestre de 2020 se crearon 131.848 unidades productivas (26.3% menos que en el primer semestre de 2019) y en el segundo semestre se crearon 82.371 unidades (un 2.9% más que el mismo período del 2019). En total, en 2020 se crearon 214.219 mientras que en 2019 se crearon 309.027 (una destrucción del 31% de empresas). Lo que se desprende de esta premisa es que, lógicamente, los empresarios, comerciantes, trabajadores independientes e informales, dada la necesidad de mantener un sustento económico por cuenta de la crisis de la pandemia, a pesar de cerrar formalmente su unidad productiva, tuvieron que mantener de alguna forma su actividad comercial (fuese reduciéndola, mutándola, cambiándola y demás); por lo que se generaría un fenómeno ya estudiado en la literatura internacional en materia de política de reactivación que constituye a todas esas empresas que tuvieron que asumir la carga de la pandemia y que, por tal motivo, cerraron su formalidad y retrocedieron al mundo de la informalidad. Un comparativo mensual de la creación de empresas lo podemos ver en la Gráfica 6.

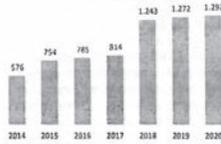
Gráfica 6 – Comparativo mensual de creación de empresa



Hablando estrictamente del tejido empresarial, hay que mencionar que aunque las solicitudes de procesos de insolvencia para empresas formales se mantuvo casi igual al 2019, es de señalar que haciendo una revisión minuciosa a los datos por sectores se encuentra una mayor tasa de insolvencia para empresas en los sectores de hotelería,

turismo, alimentación, entretenimiento y comercio al por menor o servicios locales. En la Gráfica 7 se puede observar la senda de tasas de insolvencia.

Gráfica 7 – Tasa de solicitudes de insolvencia en Colombia



Fuente: informe sobre solicitudes de insolvencia Superintendencia de Sociedades (dic. 2020).

Si se calcula la magnitud de lo que los 1.292 procesos de insolvencia representan para el tejido empresarial y productivo del país, es bueno revisar que apenas para inicios de septiembre el flujo de dinero que hacía parte de las empresas en procesos de reorganización o insolvencia representó \$43.2 billones de pesos en activos, y que sobre estos se estaría hablando de 126.147 trabajadores.

Según Confecámaras entre enero y diciembre de 2019 se crearon 309 mil unidades productivas, 2,1% más que en 2018. Estas unidades productivas registradas corresponden en un 75,7% a personas naturales y un 24,3% a sociedades. La creación de sociedades en Colombia aumentó en un 10,4% frente al 2018, al pasar de 68.159 sociedades a 75.275 en 2019. En el sector de servicios, los subsectores con mayor crecimiento fueron: peluquería, expendio de comidas preparadas, transporte de carga por carretera y servicios de desarrollo de sistemas informáticos.

Para dar una mirada más específica sobre las cifras de creación y cierre de empresas, resulta relevante revisar los informes publicados por Confecámaras y cada una de las Cámaras de Comercio. Por ejemplo, para el caso de Bogotá, en un informe de la CCB se encontró que a noviembre de 2020 había activas 441.022 empresas, lo que representó un 11% menos que el mismo periodo en 2019; aunque se presentó una reducción de cancelación de matrículas en un 20,4% similar a la tendencia nacional, el 87,2% de este tejido son microempresas y sólo el 0,9% son grandes empresas.

Para otras ciudades el fenómeno es muy similar. En Antioquia, para 2020, la creación de empresas se redujo en casi un 12,5% (37.382 empresas) y las renovaciones de matrícula cayeron un 5%. Por su parte, se redujo en un 22,4% la cancelación de matrículas frente al 2019. En Cali, el número de empresas nuevas creadas y registradas hasta septiembre de 2020 fue de 80.392, lo que en comparación al 2019 representó una caída del 15% en el registro de empresas. Aquí, al igual que en Medellín, la gran mayoría de empresas (88,3%) son micro, mientras las grandes empresas representan poca parte del tejido empresarial (0,7% para Cali).

Sobre esta tendencia de creación y cancelación empresarial es importante hacer énfasis en la última encuesta de ritmo empresarial realizada por Confecámaras bajo la cual se puede profundizar en las expectativas y el panorama de crecimiento que requieren las empresas a nivel nacional. Sobre la encuesta de las Cámaras de Comercio para el monitoreo del Impacto del COVID-19 en las empresas es importante iniciar mencionando que el 90,1% de las empresas encuestadas son Mipymes,

ubicándose los sectores comercio y servicios como casi el 80% del empresariado consultado.

Es interesante ver cómo, aunque la mayoría son micronegocios, el 64% de toda la muestra confirmó que tienen entre 1 y 5 trabajadores, por lo que se sugiere un importante impacto en el empleo. Una razón por la cual se podría explicar el aumento de empresas inactivas pero la falta de cancelación de matrículas es la expectativa que tienen frente al 2021. Esta encuesta arrojó que el 85% de las empresas que se encuentran en cierre temporal o indefinido manifestó la decisión de no cerrar definitivamente por espera a incentivos económicos al 2021. Actualmente, el 60,4% de las empresas está operando con restricciones y 16,4% se encuentran en cierres temporales o procesos de liquidación; sólo el 20,2% se encuentra trabajando a plena capacidad. Esto se puede observar en la Gráfica 8.

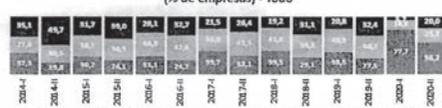
Gráfica 8 – Situación del tejido empresarial en Colombia (Ene. 2021)



En términos de expectativa de crecimiento, se arrojó que aunque la mayoría de empresas esperan que el 2021 sea un año más favorable en términos de ventas, el 56,2% de las empresas manifestó que sus ventas, a pesar de las medidas de reactivación, fueron mucho menores en comparación al semestre en el que inició la pandemia, mientras que sólo el 20% manifestó que éstas aumentarían. Este contraste entre empresas que aumentaron y empresas que disminuyeron deja un balance negativo del -36,2%. En la Gráfica 9 se puede ver el detalle de la senda de ventas (nótese cómo en el primer semestre la sensación de reducción fue de casi el 80% de todas las empresas consultadas), en donde el color azul representa las que aumentaron, el gris las que se mantuvieron igual y el morado las que disminuyeron.

Gráfica 9 – Saldo de ventas a las empresas encuestadas (Ene. 2021)

¿El valor de las ventas de la empresa durante el semestre? (% de empresas) - Todo

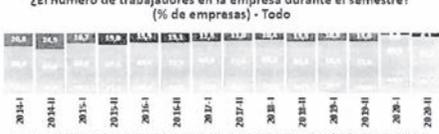


Fuente: Cámara de Comercio de Cali con base en informe nacional de Confecámaras (2021).

En los mismos términos, dicha encuesta arrojó que el 2020 fue un año difícil para la contratación de empleados, pues a pesar de los programas de apoyo al empleo, créditos y demás medidas de reactivación generadas, el saldo para finales del año evidenció todavía que algunas empresas estaban todavía en la necesidad de despedir trabajadores. La Gráfica 10 muestra la senda de contratación y despido de empleados en el tiempo para el nivel nacional, con la misma respectividad de colores.

Gráfica 10 – Entrada y salida de trabajadores en las empresas (Ene. 2021)

¿El número de trabajadores en la empresa durante el semestre? (% de empresas) - Todo



Fuente: Cámara de Comercio de Cali con base en informe nacional de Confecámaras (2021).

Finalmente, un dato interesante es que la encuesta arrojó que la mayoría de las empresas accedió al programa para el apoyo al empleo formal (PAEF) conducido por el Gobierno Nacional. Esto último sugiere que el apoyo a la nómina pudo ser una causal importante para contrarrestar los cierres y/o cancelaciones de matrícula, pero demuestra también una dificultad para el acceso a las empresas a las medidas de apoyo, pues otro gran porcentaje (39,9%) manifestó no recibir algún apoyo. El detallado de estas ayudas se puede ver en la Gráfica 11.

Gráfica 11 – Empresas que reportaron recibir algún apoyo



Fuente: Confecámaras (2021).

3.2 Efectos de la afectación empresarial en los hogares

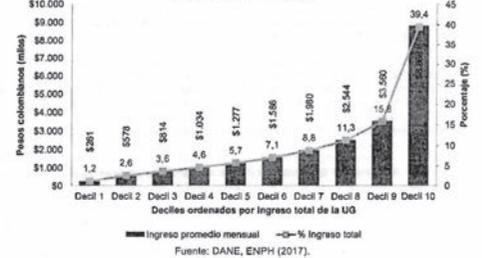
Como última generalidad, es importante revisar cómo la disminución de ingresos ha agudizado las condiciones de vulnerabilidad presentes en los hogares colombianos. En

la misma vía explicada sobre la relación entre el apoyo al sector empresarial, el aumento de empleo y por tanto la mitigación de factores económicos relacionados con las trampas de pobreza, vale la pena terminar este análisis exponiendo la radiografía del hogar colombiano y, sobre todo, de sus ingresos. Esto se puede ver en la Gráfica 12 bajo datos generales.

Revisando entonces la composición de ingresos de los hogares, los datos de la ENPH muestran que el 44,9% de los hogares cuentan con ingresos menores a 3 millones de pesos y que el 39,4% de los ingresos se concentró en el decil más alto; recordando que el promedio de personas por hogar es de tres según el DANE. Dada la coyuntura actual y su efecto en la economía nacional, se estima que un 80% de los hogares reduzcan sus ingresos con una reducción que, se espera, sea similar al impacto del PIB en la economía, posicionado entre 4,5 y 6,1%

Esta radiografía es importante, pues denota una correlación que ha sido constantemente estudiada por la literatura académica y las distintas encuestas que ha venido realizando el DANE en términos de pobreza monetaria, pobreza multidimensional y condiciones de vulnerabilidad social. Un ejemplo es la reciente encuesta pulso social, que denota los efectos adversos que tuvo la pandemia por el COVID-19 y, por supuesto, la disminución de los ingresos dada la pérdida de empleos y la imposibilidad de circular para trabajar en la informalidad respecto a su efecto en la agudización de los factores de pobreza asociados a las trampas de pobreza y pobreza intergeneracional.

Gráfica 12 – Concentración de los ingresos totales de la ENPH sobre los deciles de los hogares - Nacional



Fuente: DANE, ENPH (2017).

Aunque esta radiografía presenta datos de hogares pre-covid, no es un secreto que las condiciones económicas del hogar han empeorado por causa de ésta. Para hacerse una proyección, en su momento, producto de la pandemia el DANE calculaba que de los 7 millones 746 mil hogares que residen en las principales ciudades del país, 1 millón 617 mil pasarían a comer sólo dos comidas al día (25% de los hogares que el año pasado comían tres comidas al día). En el último reporte oficial del DANE, se encontró que al menos una cuarta parte de todos los hogares del país sufrieron este flagelo, en donde además el 10% de los hogares pasó a comer una comida al día. Esto último por supuesto como proxy para determinar el alcance de afectación económica que fue

causada en gran medida por el desempleo generalizado en el país, pues evidencian falencias en las medidas de reactivación.

Precisamente, el último reporte del DANE mostró que el 24.5% de los hogares presentó disminución de ingresos en 2020, pérdida que se calcula en 30 billones. Esta situación ha llevado a que las personas que estaban trabajando o que están en edad de trabajar amplifiquen sus condiciones de vulnerabilidad, pues por dar un ejemplo, casi el 70% de los hogares manifestó imposibilidad para ahorrar dinero y 7.4 millones de personas manifestaron no haber podido pagar las facturas del hogar.

En conclusión, esta explicación sobre la crisis económica que vive el país, enunciada desde lo general hasta lo particular, y sobre todo desde el nivel macro hasta el nivel micro, genera profundos problemas de política pública que deben ser solventados a través de medidas realmente impactantes. Es allí, pues, el lugar en el que se ubica este proyecto de ley, pues entre la cadena de generación de empleo y superación económica de la crisis, se hace necesario generar incentivos para apoyar a las empresas y que éstas, a su vez, sean motor para el crecimiento de los ingresos del hogar, del empleo y de la economía del país.

4. MEDIDAS PROPUESTAS Y JUSTIFICACIÓN

A partir de la metodología del árbol de problemas y soluciones que parte de la base de identificar causas y consecuencias de un problema de política pública determinado, es que se identifica la necesidad de generar una intervención en materia de incentivos para empresas. Siendo la mirada general del asunto la crisis económica causada por la pandemia, y subsecuentemente la afectación que han sufrido las empresas, el empleo y los ingresos de las personas por causa de la misma; se adentra luego a una serie de problemáticas específicas o puntos focalizados de intervención pública en los que el proyecto de ley está encaminado.

Vale la pena mencionar que estos puntos surgen luego de sintetizar variados y amplios insumos que se recibieron de diferentes actores empresariales, grupos de pensamiento, mesas técnicas y reuniones exploratorias; con lo cual cada medida no sólo está justificada en una revisión exhaustiva de la literatura, las experiencias internacionales y la factibilidad jurídica/económica de cada una, sino además que están dotadas de conocimientos multisectoriales y multidisciplinarios.

En ese sentido, este proyecto de ley busca responder a la creación de incentivos para las empresas y fomento a la reactivación con empleo desde tres frentes específicos:

- Insumos para la formalización mediante el Régimen SIMPLE y fomento para el empleo.
- Insumos de alivio en liquidez para las empresas alrededor del IVA.
- Insumos para la entrada a las compras públicas.

Se pasará a exponer la medida propuesta en cada punto puntualizando en el problema específico que pretende resolver y cómo dicha propuesta mitigaría dicho problema.

4.1 Formalización mediante el Régimen SIMPLE y fomento de empleo.

- Problemática identificada

En primer lugar, uno de los mayores desafíos que ha tenido Colombia en materia de mercado laboral y tejido empresarial, situación que tiene absoluta relevancia cuando se habla de medidas de reactivación, es el impulso a la formalización. Como se discutió brevemente en el punto anterior, la formalización no sólo es uno de los motores principales para el recaudo tributario, sino que además constituye toda una gama de ventajas que permiten a las empresas darse un panorama de crecimiento mucho mayor al que tendrían en la informalidad.

Sin embargo, bien se sabe que los estudios de medición estadística sobre la informalidad en Colombia no son del todo fáciles. De por sí la medición de algo que no está registrado por naturaleza representa una dificultad en términos estadísticos, por lo que los esfuerzos tanto el DANE como de otros centros de pensamiento (en los que se destaca la valiosa labor de Fedesarrollo y Confecámaras, entre otros) alrededor de la informalidad en Colombia, resultan completamente útiles para estudiar este fenómeno y proponer medidas de política pública que impacten positivamente al sector.

En este caso, en variadas mesas técnicas con expertos que nutrieron de contenido temático este proyecto de ley, surgió una problemática en torno a la aplicación de la estrategia SIMPLE (Régimen Simple de Tributación) que en Colombia está comenzando a surgir. Valga decir que, sobre ésta, los antecedentes de política pública giran alrededor de la propuesta anterior de un monotributo que, incluyendo varios pagos por impuestos que deben las empresas local y nacionalmente, así como incluso el pago de seguridad social y otros, se entendiese que la empresa era considerada como "formal" a efectos públicos y que pudiera acceder por tanto a los beneficios de la formalidad. Esto no sólo es una medida absolutamente poderosa en términos de recaudo (pues es aumentar el potencial de recaudo), sino en términos de mercado laboral, pues reduce costos de transacción y facilita la labor de las empresas, sobre todo micro, que usualmente tienen asimetrías de la información respecto de los procesos para el pago de impuestos y que, por lo demás, terminan no cumpliendo completamente las obligaciones de ley.

Es en este sentido que nace el SIMPLE como una segunda propuesta ante la falta de inscripciones al Monotributo, pues con éste, mediante la Ley 2010 de 2019 que adiciona un articulado regulando este régimen, se establecen tarifas diferenciadas que incluyen impuestos nacionales y uno local: Impuesto de Renta, Impuesto de Consumo y el Impuesto de Industria y Comercio Consolidado. Todas las empresas que obtienen ingresos brutos de hasta 80.000 UVTs (2.900 millones aproximadamente para 2021) pueden acceder a este régimen, que tiene una tarifa única de pago anual y con anticipos bimestrales opcionales sobre los cuales se puede hacer una reducción si se da el pago al Régimen de Pensiones. Nótese que actualmente la DIAN estructuró un sistema administrativo interno mediante el cual se ésta quien recauda el Impuesto de Industria y Comercio consolidado pero es luego quien se lo transfiere a cada municipio respectivo, pues esto es importante para considerar otras posibilidades del mismo Régimen, como se verá en la propuesta.

Ahora bien, la principal problemática que tiene actualmente este régimen es que no genera suficientes incentivos para la formalización de una empresa que está iniciando o que lleva un período corto de iniciación, pues el público para el que está pensado este Régimen, que son las micro y pequeñas empresas principalmente, son empresas que tienen pocos trabajadores y que no tienen suficientes ingresos o disponibilidad de caja

para cumplir otras obligaciones. En este sentido, la discusión internacional del concepto de monotributo y de los sistemas de apoyo a la formalización suele centrarse en que un buen sistema de tributación diferenciado para micronegocios debe incluir un pago único diferenciado que incluya los impuestos principales, los aportes a seguridad social y parafiscales, los pagos por derecho de personería jurídica y demás.

Desafortunadamente, en Colombia todos estos pagos o aportes se encuentran descentralizados o son administrados por sectores distintos, lo que por supuesto dificulta la labor de las empresas en su camino hacia la formalización. No obstante, la discusión sobre la senda de crecimiento en la formalización no es un proceso de blanco y negro: no es un proceso en el que una empresa por hacer ciertas cosas se convierte automáticamente en formal, sino que el fenómeno se da más hacia pasos escalonados, como prueba Fedesarrollo, en los que a medida que la empresa va adquiriendo mayor fuerza va a su vez asumiendo obligaciones de ley.

En este sentido, para evitar que estas empresas no dejen de cumplir sus obligaciones legales y, además, recogiendo toda la experiencia internacional y las recomendaciones de política pública en materia de formalización que tienen que ver sobre estos regímenes de tributación, se hace necesario brindar medidas especiales y diferenciadas en las que legalmente se dé la posibilidad a los micronegocios de entrar a la formalidad con mayores facilidades y con un futuro único trámite, para así trasladar los costos de transacción o la necesidad de cruzar los aportes entre entidades al Gobierno Nacional, quien es el que tiene todas las herramientas para lograrlo y como en este momento sucede con los municipios.

- Medida propuesta

Expuesta esta necesidad de realizar una simplificación mayor y más incluyente en términos de trámites y pagos que realizan las micro y pequeñas empresas, las propuestas de este proyecto de ley es integrar medidas ya existentes de exoneración de pagos por parafiscales y aportes, para que a éstas se les dé mayores ventajas y se atraiga más el concepto de formalización empresarial invirtiendo el análisis de costo-beneficio: y dando como resultado una decisión de ingresar al régimen e incrementar el recaudo tributario nacional; entre otras medidas de integración con el Sistema de Seguridad Social a largo plazo.

Así las cosas, este proyecto de ley propone las siguientes modificaciones en el Estatuto Tributario (originadas mediante la Ley 2010 de 2019):

- Para volver más atractiva la entrada al régimen SIMPLE y beneficiar a las micro y pequeñas empresas como mayoría de éste, se propone ampliar y volver de facto el beneficio ya existente sobre exoneración de parafiscales y aporte en salud por parte del empleador incluido en el artículo 114-1 del Estatuto Tributario sin el cumplimiento de otros requisitos.
- Actualmente el sistema de exoneración incluido en el artículo 114-1 debe ser marcado por las empresas durante su liquidación de seguridad social para nómina. Muchas de éstas desconocen esta exoneración, por lo que se obliga a las operadoras PILA para que dicha exoneración quede por defecto en sus plataformas de pago para los contribuyentes del SIMPLE, generando un *nudge* o invirtiendo la carga actual para que se corrija la asimetría de información y todas las empresas se vean beneficiadas de esta exoneración.

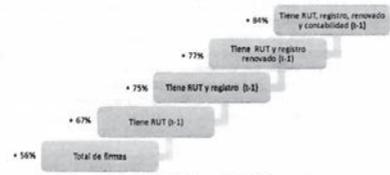
- Ampliar el periodo de inscripción anual de las empresas al régimen SIMPLE, pasando del 31 de enero al 28 de febrero; para que más empresas puedan entrar a este régimen.
- Como mecanismo a mediano y largo plazo, y para facilitar el proceso de pago de las diferentes obligaciones que tienen las empresas, así como reducir costos de transacción y centralizar operaciones, se propone integrar por un solo medio o trámite el recibo del SIMPLE con la planilla PILA correspondiente a salud en la Seguridad Social. Para esto, la DIAN organizará para iniciar en 2026 una integración completa de todos estos sistemas.
- Finalmente, se abre la posibilidad para que los municipios puedan establecer mecanismos de incentivo al empleo formal a través de reducciones tributarias en el impuesto de industria y comercio, según sus características fiscales.

- Explicación de relevancia

A partir de la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) del DANE, Fedesarrollo desarrolló un estudio en el que a partir de una muestra midió la informalidad empresarial, que restringe los empleadores y trabajadores independientes que declaran tener un negocio propio en los sectores de comercio, industria, servicios o poseer una finca. Según los resultados obtenidos en 2018 en Colombia existen 2 millones de unidades productivas y el 60% de estas unidades de negocio son informales.

Según estimaciones de Fedesarrollo, evaluando el grado de posibilidad de pago de impuestos como el IVA por ejemplo según el grado de formalidad, la probabilidad de que una empresa declare impuestos de renta, IVA o ICA es del 56%. Esta probabilidad se incrementa 67% si las firmas tenían RUT en el periodo anterior; 75%, si las firmas además tenían registro en Cámara de Comercio; 77%, si este registro había sido renovado y a 84%, si, además, la empresa llevaba contabilidad. Esta cadena de probabilidades condicionadas (Gráfica 13) sugiere que la informalidad funciona como una escalera, donde la puerta de entrada es el registro en Cámara de Comercio y/o el RUT y cada peldaño está asociado a una medida de informalidad con menor cumplimiento relativo; siendo el pago de impuestos uno de los peldaños más elevados*.

Gráfica 13 – Cadena de formalidad y probabilidad de pago de impuestos



Fuente: Fedesarrollo (2013).

La formalización empresarial es sin duda una ganancia para los trabajadores, para las empresas y para el Estado. Para los trabajadores la formalización representa un aumento en el bienestar debido a factores como la estabilidad laboral, el horario de trabajo, la satisfacción laboral y los ingresos de los trabajadores aumentarán. El beneficio para las empresas en la formalización se traduce directamente en el aumento de la productividad, que además puede incidir en el aumento de ingresos del trabajador o del aumento de plazas de trabajo (oferta de mercado laboral). Según los resultados de Fedesarrollo, la productividad promedio que ganaron los negocios informales sobre los formales era del 54% en términos brutos y 66% en términos netos. Si se controlan estadísticamente estos resultados con otras variables observables para tener mayor rigurosidad estadística; las firmas informales pasan a tener un 59% de la productividad bruta de las formales y un 71% de la productividad neta de las firmas formales. Este resultado sugiere que, incluso con el control de variables, la productividad sigue siendo mayor la productividad en empresas formales que informales, situación que es esperable y que, además, representa ese gran desafío de política que se intenta mitigar en este proyecto de ley.

Otro apartado importante en este análisis es el ecosistema de emprendimiento. En Colombia, éste es un ecosistema dinámico y en constante crecimiento. Según el monitor de emprendimiento global del año 2019, y publicado en el año 2020, Colombia tiene una tasa de emprendimiento en etapa temprana del 23% que, si se compara con países de Europa, Norteamérica, Asia- Pacífico, Medio Oriente y África, es una de las tasas de emprendimiento temprano más altas del mundo.

Sin embargo, una tasa de emprendimiento en etapa temprana no se traduce en la supervivencia de las empresas a través del tiempo. Este es el caso de Colombia, pues la tasa de supervivencia empresarial se asemeja a las dinámicas globales. En promedio entre el 20% y el 30% de las empresas nacientes desaparecen después del primer año de creación, el 40% de empresas cesan su actividad después de 3 años y cerca del 60% de empresas ya han desaparecido después de 5 años. En este mismo tiempo, en Argentina sobreviven 5 empresas y en México sobreviven 3 empresas.

Con el fin de comprender las dinámicas de supervivencia a través del tiempo del tejido empresarial colombiano, en esta sección se explican los determinantes de supervivencia de las empresas, que según Confecámaras depende de tres grupos de factores: específicos, sectoriales y localización geográfica.

Entre los factores específicos de supervivencia de las empresas están los relacionados con su tamaño, acceso a créditos, la innovación, el origen de la empresa y la posibilidad de exportaciones. En cuanto al tamaño, las empresas con reducida escala enfrentan mayores limitaciones tecnológicas, productivas y de gestión, situación que afecta su capacidad de respuesta frente a factores de competencia, cambios de demanda y en general de condiciones del mercado. Cuanto menor es el tamaño de la empresa, menores son sus probabilidades de supervivencia. La limitación del acceso al crédito lleva a muchas empresas hacia endeudamientos inapropiados, con prestamistas informales que ofertan créditos a muy corto plazo y a cuotas muy altas, quedando expuestas a un riesgo alto de quiebra por falta de liquidez. Este último fenómeno hace que la empresa no obtenga una respuesta favorable en la demanda de su producto o servicio de parte de los consumidores.

En cuanto al factor de innovación, éste dependerá del sector donde la empresa entre a operar y las dinámicas de innovación. Por ejemplo, si la empresa entra a una industria con alta innovación, encontrar una posición privilegiada puede ser complicado. En cambio, si la innovación es poca en el sector y la empresa entra al sector a innovar, la

probabilidad de supervivencia es mayor. Por otra parte, si se tiene en cuenta el origen de la firma, entendiendo origen como empresas nacionales o extranjeras, se ha encontrado que las empresas extranjeras tienen mayor probabilidad de supervivencia que las empresas que son de propiedad nacional. Finalmente, las actividades de exportación de las empresas son otro factor que aumenta las probabilidades de exportación. Las exportaciones aumentan hasta en un 70% la probabilidad de exportación de las empresas, mientras que la probabilidad de supervivencia de las empresas que no exportan es del 50%.

Un segundo grupo de factores como determinantes para la supervivencia son los factores sectoriales. Confecámaras encontró que la supervivencia está relacionada con la concentración del sector, puesto que si bien tienen mayores tasas de rentabilidad y economías de escala que permiten a las firmas del sector operar con eficiencia, esto dificulta la entrada de nuevas firmas, ya que deben soportar conductas agresivas por parte de las empresas preexistentes. En contraste las industrias con altas tasas de penetración tienen menores probabilidades de supervivencia debido a la intensificación de la competencia. Sin embargo, cuando las firmas entran a industrias con rápido crecimiento, la alta penetración no se traduce necesariamente en menores tasas de supervivencia.

Finalmente, el tercer grupo de factores de los que depende la supervivencia de las empresas son los factores de localización geográfica. La ubicación de la nueva empresa está relacionada con los costos y acceso a los insumos necesarios, capital humano disponible y volumen de los clientes. Estos factores se pueden encontrar esquematizados en la Gráfica 14.

Gráfica 14 – Determinantes de la supervivencia y formalidad empresarial



Es con toda esta argumentación, pues, entendible que el apoyo a la formalización de las Mipymes acarrea importantes crecimientos para la productividad interna del país y el fomento del empleo, justificando la propuesta del presente proyecto de ley en términos de generar mayores incentivos para que estas micro y pequeñas empresas tengan mejores posibilidades de entrar al mercado formal. Las Mipymes son importantes en Colombia porque componen el 96% del tejido empresarial y son la

fuerza del 80% del empleo, adicional a que son las responsables de la causación del IVA a propósito de la discusión del tercer punto. En conclusión, no sólo se encuentra acertada sino también justificada la necesidad de esta intervención que propone este proyecto de ley, pues entraría a aportar incentivos para la formalización de estas empresas y la cadena de efectos que subsecuentemente se causan (tejido empresarial, mercado laboral, ingresos y superación de vulnerabilidad de hogares).

Finalmente, en términos de revisar las cifras de inclusión en el Régimen Simple de Tributación como está estructurado actualmente, la DIAN reporta que a corte del año gravable actual, un total de 31.190 contribuyentes se han registrado en el SIMPLE. Éstos se reparten en proporciones casi iguales para personas naturales y jurídicas, y el año en el que más se registraron fue en el 2020, concerniente a las personas naturales (9.954), mientras que para personas jurídicas, el 2020 se registraron 6.137. En el último periodo del año 2021 con posibilidad de inscripción (enero), se registraron en total 6.224 contribuyentes.

Si se observa en términos desagregados, se encuentra que la gran mayoría de los inscritos en el SIMPLE son microempresas. Por ejemplo, con datos de las últimas declaraciones disponibles mediante el formulario de la DIAN, un total de 6.417 contribuyentes aportaron declaración anual consolidada, y de éste, el 90.4% fueron microempresas (principalmente del sector servicios). Para el 2020, se tiene información preliminar de que de 12.542 contribuyentes que presentaron anticipos del SIMPLE, el 93.5% fueron microempresas. En suma, sólo 256 municipios (23.2% del país) han adoptado en su normalidad interna la tarifa consolidada de ICA.

En ese sentido, para entrar a hablar específicamente sobre las medidas propuestas, es necesario hablar primero en qué consiste la **exoneración incluida en el artículo 114-1 del Estatuto Tributario** y su inclusión actual. Este artículo, originado desde antes de la existencia del régimen SIMPLE, busca que las personas naturales y jurídicas que tienen trabajadores que ganen menos de 10 SMMLV puedan beneficiarse de no pagar los parafiscales asignados en la ley (SENA e ICBF) y de su aporte a salud por trabajador (8.5%). Para lograr esto no es necesario realizar algún trámite especial, sino que al momento de estar pagando la seguridad social de nómina en las plataformas de pago de las operadoras PILA se debe marcar una casilla de que se es beneficiario de dicho régimen. El articulado del régimen SIMPLE permite la integración con este beneficio pero, para beneficiarse de éste, se requiere que el contribuyente tenga conocimiento de su existencia y se le asigne la carga de ser este mismo quien se exonere durante el pago de nómina; situación en la cual hay una clara asimetría de la información entre actores.

Actualmente, ni la DIAN ni la UGPP cuentan con datos de cuántas personas se han beneficiado de esta exoneración. En suma, en un ejercicio de búsqueda de empresarios que hayan aplicado a este régimen desde varios gremios empresariales, se encontró que nadie conocía dicha exoneración. Es por tanto necesario establecer para estos casos un empujón o *nudge* en los términos de la teoría económica, acogiéndose de igual forma a lo sugerido por la DIAN, para invertir las cargas y volver de facto la inclusión en la exoneración y que sean las operadoras PILA, dentro de sus plataformas de pago, las que realicen las gestiones necesarias para que con el hecho de que un pagador sea contribuyente del SIMPLE, se le realicen los descuentos asignados en parafiscales y en salud.

De igual forma, bien es sabido que el inicio del año fiscal (enero) suele ser usado, sobre todo para las empresas menos organizadas, todavía como etapa de cierre del año fiscal anterior y como organización de nómina y otros asuntos administrativos no relacionados con impuestos. Actualmente el régimen SIMPLE tiene su inclusión

obligatoria hasta el 31 de enero, lo que representa una barrera de entrada para que más empresas entren. Ejemplo de esto es lo que muestran los datos citados de la DIAN, que muestran una reducción de más del 60% de contribuyentes en el 2021 con respecto al 2020. Frente a esto, se propone en concordancia con el sugerido por la DIAN, ampliar la fecha de inscripción hasta el 28 de febrero de cada año gravable. Esto compagina, además, con la necesidad de que los Concejos Municipales de cada municipio puedan aprobar su tarifa consolidada ICA en cualquier momento.

Finalmente, un último mecanismo propuesto a largo plazo es el de **organizar el sistema de obligaciones por único trámite entre la DIAN y las operadoras de Seguridad Social**, de tal forma que en el futuro puedan las empresas, a través de un único recibo o una única plataforma, liquidar y pagar la mayoría de sus obligaciones legales periódicas. Lo último muestra un potencial enorme que representa el SIMPLE para la formalización de los micronegocios, por lo que ampliar el espectro incluyendo los pagos en salud a Seguridad Social atraerá un número mayor de contribuyentes que a su vez potenciarán el mercado laboral, aportando al mejoramiento de las condiciones de vulnerabilidad y superación del hogar por causa de la pandemia.

4.2 Alivios en liquidez para las empresas alrededor del IVA

- Problemática identificada

En segundo lugar, otra de las presiones que tienen las empresas en Colombia para poder operar y mantener una buena productividad son los pagos por concepto de Impuesto de Valor Agregado (IVA en adelante) periódicos. En conversación con diversos sectores, los gremios han manifestado que dada la pandemia se les ha dificultado el tener suficiente liquidez y disponibilidad de flujo de caja para responder por los pagos de IVA que debe hacer al Gobierno Nacional producto de las ventas que genera.

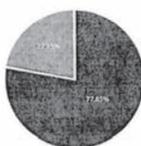
El IVA, como bien se define en las diferentes normas relativas al Estatuto Tributario, es un impuesto cuyo hecho generador recae sobre la venta de bienes y servicios que se encuentran grabados, y su tarifa es principalmente del 19%. Como la recaudación de este tributo la hacen las empresas a través de una retención del dinero, son éstas quienes en el régimen ordinario deben, bimestral o cuatrimestralmente, presentar a la Dirección de Aduanas e Impuestos Nacionales (DIAN) una declaración en la cual reportan y además pagan el valor recaudado de IVA. Sobre esto se pueden aplicar unas retenciones que posteriormente se descuentan del pago total. La situación es similar para el caso de los contribuyentes al régimen SIMPLE, pues anualmente deben presentar una declaración consolidada de IVA y, además, está el pago de unos aportes bimensuales que incluyen el pago de lo recaudado mensualmente por IVA.

Ahora bien, el asunto en cuestión que dificulta la facilidad de operación y reactivación económica de las empresas, además del contexto tributario local, es precisamente los tiempos en los cuales se pagan estos aportes de IVA a la Nación. Teniendo en cuenta que la carga tributaria nacional es otra carga importante para las empresas, la principal dificultad no es tanto el valor del pago de IVA, situación que no es objeto de la presente ley, sino los tiempos de concomitancia entre la presentación y el pago del aporte; pues sucede que las empresas (sobre todo las más pequeñas) al tener una afectación en su flujo de caja producto de la pandemia, no tienen tanta facilidad en hacer ambos pasos

<p>(declaración y pago) en el mismo momento sin ver todavía más afectada su disponibilidad económica.</p> <p>Sobre esto, superando el debate de que el dinero recaudado por concepto de IVA es en principio un dinero administrado por la empresa que posteriormente, transferido a la DIAN, se convierte en dinero público administrado por tal Dirección; se hace entonces menester permitir que los momentos de declaración y pago del aporte de IVA se hagan en tiempos diferentes; en plazos más razonables de manera temporal con el momento de coyuntura que se vive, dando por supuesto este beneficio a los inscritos en el régimen SIMPLE de tal forma que sea, aún más, atractiva la entrada a este régimen.</p> <p>Esta medida no se trata jurídicamente de una exención, exclusión o trato preferencial, ni hay un cambio en el proceso de declaración de IVA, sino en un tiempo acordado. Vale la pena mencionar que, además de la no afectación, la misma DIAN en una ocasión ya movió el calendario de pago por concepto de pandemia, por lo que administrativamente es una operación viable, proporcional y suficiente.</p> <p>- Medida propuesta</p> <p>Teniendo en cuenta lo explicado, el presente proyecto de ley propone hacer un ajuste en el tiempo de pago por IVA como medida temporal, respondiendo al artículo 915 del Estatuto Tributario que define los procesos de declaración y pago del aporte de IVA para los inscritos en el régimen SIMPLE.</p> <p>Así las cosas, para alivianar la disponibilidad de caja de las empresas y permitir que éstas operen en un contexto tributario favorable que entienda la coyuntura y las necesidades de reactivación que se hacen necesarias actualmente; pero además para generar mayores incentivos a la inclusión en el régimen SIMPLE y beneficiar directamente a las empresas que están surgiendo, este proyecto de ley propone:</p> <ul style="list-style-type: none"> • La declaración anual consolidada por IVA, para los contribuyentes del régimen SIMPLE, se podrá pagar dentro de los dos meses siguientes sin causación de intereses de mora. • Si la empresa presenta extemporáneamente la declaración, el pago deberá darse de inmediato y no podrá acogerse a este beneficio. <p>- Explicación de relevancia</p> <p>Al igual que la información que se presentó en las consideraciones generales sobre las empresas en Colombia, también es importante hablar de las dificultades para los micronegocios y las empresas que las afecta en mayor medida la disponibilidad de caja. Las dinámicas empresariales entre el año 2018 y 2019 en Colombia representaron un crecimiento en el sector formal y, aunque la formalidad empresarial trae beneficios para los empleados como el bienestar laboral, así como lograr una mayor productividad y generar mayor recaudo tributario, lo cierto es que, como se verá en el punto sobre los incentivos al Régimen SIMPLE, la formalidad empresarial sigue representando apenas un fragmento de la realidad del país.</p> <p>Ahora bien, en la última entrega del Doing Business del 2020, en el cual participaron 190 países, Colombia ocupó el puesto 67 de 190 en facilidades para hacer negocios, puntaje que por lo demás revisa el ecosistema tributario nacional. En ése, Colombia obtuvo un puntaje de 70,1 sobre 100, y aunque el país tiene una posición relativamente favorable, las dificultades regulatorias en la facilidad de pago de los impuestos son</p>	<p>evidentes. La sección de pago de impuestos del ranking dio una posición de 148 entre 190 países, principalmente porque alistar, llenar y pagar impuestos en Colombia toma en promedio 256 horas por año, 100 horas más que el promedio de los países de la OCDE. Estas 100 horas de más representan costos de transacción que deben asumir las empresas cuando se formalizan y pagan impuestos.</p> <p>En suma, según el Global Entrepreneurship Monitor (GEM), Colombia ocupa el puesto 41 de 54 en el rubro de burocracia e impuestos de la calificación dada por los expertos del GEM el marco normativo empresarial en Colombia. Para algunas Mipymes el sistema tributario colombiano representa una barrera para desempeñar las labores propias de la firma porque el promedio de horas que se invierte para el pago de impuestos, el capital humano y los recursos financieros requeridos es muy alto.</p> <p>Por esto, mientras que el tejido empresarial en Colombia encuentre altos trámites para el pago de los tributos y no poder emplear el tiempo en actividades útiles para la productividad de la empresa, no se logrará aumentar el número de empresas formales y consecuentemente los impuestos, como porcentaje del PIB, bajarán en comparación a la región de América Latina.</p> <p>Hablando sobre la importancia del recaudo, el IVA es una de las fuentes principales de ingresos tributarios del Gobierno Nacional Central, por lo que resulta evidente la necesidad de facilitar el pago del impuesto y aumentar el número de empresas que lo hagan, teniendo en cuenta que la mayoría son microempresas. En este sentido, el problema principal en la recaudación del IVA no radica en que las tarifas sean altas, sino que existen cuestiones estructurales dentro de la legislación, en las que se destacan un sistema complejo de tributación que termina favoreciendo los niveles de evasión, entre variadas exenciones y tasas diferenciales para cada tipo de bienes y servicios; al igual que las dificultades administrativas a las que se enfrentan las empresas en Colombia a la hora de cumplir con los deberes tributarios; situación que lo convierte en un impuesto regresivo.</p> <p>En este orden de ideas, el tema preocupante es la brecha tributaria en Colombia. Ésta es relación de la suma de la evasión más la elusión, dividido entre el recaudo potencial. La brecha del IVA en 2015 fue de 18% por ejemplo, lo que significa que por cada \$1000 pesos colombianos destinados por los compradores al pago de IVA, no se están recaudando \$180 pesos. Aunque Colombia presenta una brecha en el pago del IVA menor, en comparación con otros países de Latinoamérica como Chile, México, Brasil, Guatemala; ésta sigue siendo preocupante debido a que el 86% de los ingresos del Gobierno Nacional Central provienen de los ingresos tributarios y el 34,9% de éstos son el recaudo por concepto de IVA.</p> <p>En muchas ocasiones las Mipymes deben incurrir en deudas insostenibles para cumplir con los deberes tributarios, debido a que las facturas no son emitidas y liquidadas en el mismo instante del tiempo. Por esto, el presente proyecto de ley busca solucionar los problemas de liquidez de las empresas modificando el artículo 915 del Estatuto Tributario para que el IVA de los contribuyentes del SIMPLE sea declarado y pagado en momentos diferentes del tiempo.</p> <p>Así las cosas, se hace relevante que, sin afectar el importante recaudo total del impuesto de IVA, se permita como ya una vez se realizó el movimiento del calendario que, por lo demás, apoyaría el flujo de caja de empresas y largo plazo permitiría que éstas tengan mayores incentivos para entrar en la formalidad, situación que de facto contribuirá al recaudo tributario mismo de la Nación. Con el fin de promover el desarrollo</p>
<p>empresarial de Colombia, disminuir la brecha en el pago del IVA y lograr que a las Mipymes se les facilite el pago del IVA complementado la ley de plazos justos, se deben facilitar estrategias como la propuesta en el presente proyecto de ley.</p> <p>4.3 Insumos para la entrada a las compras públicas</p> <p>- Problemática identificada</p> <p>Por último, otro factor que puede constituir un gran avance en materia de inclusión de los micronegocios, empresas afectadas y empresas nacientes es su entrada en el mercado de las compras públicas. Este asunto ya ha sido estudiado en numerosas ocasiones; puntos en los que se destaca la relevancia de la participación de este tipo de empresas en la contratación pública.</p> <p>Aunque el país ha venido realizando valiosos esfuerzos para incluir a las Mipymes en este mercado, como por ejemplo la reciente aprobación de la Ley 2069 de 2020, es claro que todavía sigue existiendo algunos rezagos, costos de transacción y numerosas barreras en los trámites que siguen poniendo en desventaja a los micronegocios en contraste con empresas ya mucho más posicionadas.</p> <p>En conversación con expertos en contratación pública y con las Cámaras de Comercio, a partir además de la numerosa data disponible en términos de compras públicas, surgió la necesidad de simplificar los trámites y reducir los costos que implica ingresar a ser oferente de un contrato público, específicamente del ya conocido Registro Único de Proponentes (RUP en adelante).</p> <p>El RUP consiste en una herramienta que permite ubicar en un solo registro todas las personas naturales y jurídicas que quieren ser contratistas del Estado, de tal forma que en ésta se evalúen, según la Ley 80, cuatro criterios principales o requisitos habilitantes (experiencia, capacidad jurídica, capacidad financiera y capacidad organizacional) que son los que determinan la viabilidad e idoneidad de un oferente frente al pliego realizado por el contrato aperturado.</p> <p>Para este ingreso, la Ley de Emprendimiento fue consciente en su justificación de la dificultad que tenían las Mipymes para ingresar, por lo que concibió tanto figuras para que negocios todavía no muy robustos puedan unirse y así hacer una propuesta como un solo contratista conjunto, así como figuras de desempate y facilidad de elección.</p> <p>No obstante, resulta interesante observar que la inscripción y renovación del RUP, pasos necesarios para iniciar los procesos de contratación pública en objetos contractuales más grandes, tienen según la Ley 1150 de 2007 y el Decreto Único Reglamentario 1074 de 2010 unos costos algunas veces del doble o del triple del precio de lo que le costaría a un micronegocio o pequeña empresa acceder a otros trámites de Cámara de Comercio, como la renovación de la matrícula mercantil por ejemplo, incluso sin finalmente no adquirir la adjudicación de algún contrato público. Esta situación apunta a que a pesar de que las Mipymes en su mayoría han ingresado a procesos de contratación directa en los que no se requiere la inscripción en el RUP, la problemática que se causa es que para contratos que no son de mínima cuantía y que mediante la figura de uniones o consorcios (o en general la parcelación de un contrato público en porciones de tal forma que varias mipymes puedan ingresar ser contratistas), en los que sí se requiere inscripción del RUP para todos los integrantes de dicha unión, se estaría entonces generando una dificultad adicional para que estas empresas no sólo entren sino que se mantengan su antigüedad en el registro, toda vez que estarían</p>	<p>asumiendo costos muy altos para renovar y actualizar constantemente el RUP. Esto, sin mencionar que estos costos no están diferenciados precisamente por el tamaño empresarial o si quiera el rango de ingresos de una empresa, sino que son una tarifa estándar que claramente da mayor ventaja sobre las empresas que tienen mayores posibilidades económicas que los micronegocios y pequeñas empresas.</p> <p>Esto, como se verá en la explicación de relevancia, tiene completa relación con el hecho de que las Mipymes tienen, a pesar de las recientes medidas de inclusión en el mercado de compras públicas, dificultades en su acceso pues si se plantea acceder a formas de contratación más complejas que una proveeduría de bienes o servicios básicos (como por ejemplo el desarrollo de software, el complemento al blockchain, internet de las cosas o en general a la contribución de la modernización y la cuarta revolución industrial en la administración pública) se requerirá de reducir todavía más los costos de entrada al sistema.</p> <p>Es en esta problemática específica en la que se centra este proyecto de ley, pues en éste lo que se busca es que se generen incentivos para alivianar este fenómeno.</p> <p>- Medida propuesta</p> <p>Si se concibe a la pandemia entonces como una oportunidad para que se fortalezcan y faciliten las puertas de acceso al mercado de las compras públicas para las mipymes, se justifica la intervención y la necesidad de modificación de la normativa mencionada.</p> <p>En ese sentido, este proyecto de ley propone lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Generar tarifas diferenciadas según un rango de Ingresos de UVTs basados en lo establecido en el Decreto 957 de 2019 para los costos de inscripción, renovación, actualización y certificados asociados al Registro Único de Proponentes; todo en torno a los derechos de registro que deben sufragarse en favor de las Cámaras de Comercio. • Como balance de cargas, las micro y pequeñas empresas que accedan por primera vez al RUP se les contará como antigüedad o experiencia acumulada en este los años anteriores al primer registro en los que haya contratado directamente con el Estado. <p>- Explicación de relevancia</p> <p>Para el 2020 en Colombia se calcula la existencia de 2,5 millones de Mipymes, que representarían el 90% de las empresas constituidas en el país. Este gran entramado de empresas produce el 30% del PIB y, además, aportan la importante cifra de un 65% de toda la fuerza laboral nacional.</p> <p>Esto, como un contexto de su gran importancia, es más interesante si se contrasta con las cifras de ingreso al mercado de las compras públicas y en general los bienes y servicios que allí se contratan. Se estima que el mercado de compras públicas representa cuando menos el 15% de todo el PIB nacional. Por ejemplo, según datos de Colombia Compra Eficiente, las compras públicas representan en total 110 billones (13% del PIB), en los que la participación de las mipymes para datos de 2018 fue del 46% (un gran contraste si se compara con la cantidad de empresas incluidas en este género).</p> <p>En suma, un punto interesante sobre esta situación es que ACOPI, el gremio que agrupa a las mipymes en Colombia, realizó un estudio en el que determinó diferentes</p>

variables y encontró algunos hallazgos en torno al mercado de las compras públicas para las mipymes. En primer lugar, el 62% de las empresas encuestadas manifestó tener nula, baja, discreta o neutra preparación para entender los trámites y no encontrar barreras al momento de acceder a la contratación pública. En comparación, el 50,59% de las empresas manifestó tener interés en participar en el mercado de las compras públicas, lo que demuestra una brecha entre las empresas que se sienten preparadas o que ven facilidad en el acceso contra las empresas que realmente quieren participar. La mayoría de las empresas encuestadas (61,81%) manifestó que el principal problema es que los trámites sean costosos o muy complicados. Esto conlleva, por tanto, a que de las empresas encuestadas sólo el 26,3% cuente con un RUP vigente o alguna vez haya accedido a éste, mientras que un gran 73,7% jamás haya accedido por su alto costo o por desconocimiento del mismo. Esto se puede evidenciar en la Gráfica 15 si se pregunta por la participación en el mercado.

Gráfica 15 – Participación en el mercado de las CP para las mipymes



Gráfica 26. ¿Ha contratado con el estado en los últimos 24 meses?

Fuente: Informe mipymes y compras públicas en Colombia - ACOPI (2019).

De igual forma, al indagarse por el tipo de contratación de las que han participado las mipymes que lo han logrado o que les ha interesado, esta investigación concluyó algo interesante y es que mientras el tipo de contratación preferida a la que le apuntan las políticas públicas de inclusión a las CP están enfocadas en la mínima cuantía o la contratación directa; las empresas encuestadas denotaron un interés y una preferencia en la participación a otras modalidades de licitación pública distintas a la mínima cuantía. Esto sugiere, pues, que las Mipymes están cada vez más interesadas en participar en modalidades más complejas y relevantes para el Estado (como la modernización digital del mismo, por ejemplo) en vez de preferir una proceduría básica de bienes y servicios, por lo que se justifica precisamente la necesidad de que este proyecto de ley intervenga en tarifas diferenciadas para los trámites asociados al RUP de cada uno de los integrantes que posteriormente hagan parte de las mipymes que se postulan a un contrato público. En especial, la encuesta arrojó que, de licitaciones, la subasta inversa sería la modalidad preferida (53,1%) por las empresas que entraron al mercado de las compras públicas; mientras que si se pregunta por la mínima cuantía, sólo el 26,5% manifestó haber sido participante de dicho proceso. Vale la pena resaltar que la muestra de esta encuesta arrojó un 48,42% de pequeñas y 37,03% de medianas empresas, por lo que se puede suponer que la mínima cuantía sería la preferida para las micro restantes (14,56%) mientras que las otras modalidades más complejas estarían dirigidas a pequeñas empresas principalmente. Los tipos de contratación con mayor participación se pueden ver en detalle en la Tabla 1.

Tabla 1 – Participación de las mipymes en las CP por tipo de licitación

	Subasta inversa		Acuerdo marco de precio		Bolsa de producto		Concurso mérito		Cuantía mínima	
	Q	%	Q	%	Q	%	Q	%	Q	%
Sí	28	53,1	18	36,7	12	24,5	17	34,7	13	26,8
No	23	46,9	31	63,3	37	75,5	32	65,3	36	73,5
Total	48	100%	49	100%	49	100%	49	100%	49	100%

Fuente: Informe mipymes y compras públicas en Colombia - ACOPI (2019).

Así las cosas, vale la pena mencionar que en Colombia los actos de registro son operados (recaudados y liquidados) por las Cámaras de Comercio como privados que ejercen función pública. En suma, la Ley 1150 de 2007 que modificó la Ley 80 dio la regla general de que, en materia del RUP, son las Cámaras de Comercio las que realizan este trámite y son a favor de éstas que se sufragan unos valores específicos en UVTs. Estos valores están determinados de manera fija y sin diferenciación por el Decreto 1074 de 2015 en su artículo 2.2.2.46.1.7, en el que el Gobierno establece a su criterio los valores, que son: i) 16.17 UVT (\$587.000 COP - 2021) para inscripción y renovación, ii) 8.64 UVT (\$314.000 COP - 2021) para actualización, iii) 1.46 UVT (\$53.000 COP - 2021) para certificados y iv) 0,08 UVT (\$3.100 - 2021) para copias. Es menester, además, tener en cuenta que de aproximadamente 27 mil proponentes que se encuentran en el RUP, las micro y pequeñas empresas constituyen el 76%, las medianas el 14% y el restante (10%) son grandes. De igual forma, más de la mitad de estos registros se encuentran en la Cámara de Comercio de Bogotá, en donde aproximadamente el 95% son personas jurídicas.

Estos costos no sólo son mucho más altos (el doble o el triple dependiendo de los ingresos de la empresa y por ende de los costos de su renovación, por ejemplo) que los costos generales de los actos de registro sobre los cuales deben operar las mipymes; sino que distinto a la matrícula mercantil éstos no tienen tarifas diferenciadas dependiendo del tipo de empresa que se trate. Por lo tanto, hay sin duda una asimetría y una desventaja de competencia entre diferentes empresas que, de entrada, dificulta el ingreso de las mipymes a las compras públicas. Entre otras razones de falta de acceso al mercado, como percepción de transparencia de la contratación pública o desconocimiento de los trámites, esta medida sería un alcance que se puede modificar desde la ley y que funciona como incentivo.

En suma, para que una empresa no pierda su antigüedad en el RUP, debe renovarlo anualmente sin distinción de cuándo lo inscribió, actualizó o que incluso esté contratando con el Estado, y debe además actualizar el RUP cada vez que realice un contrato público; por lo que una empresa que inicie en el mercado de las compras públicas y comience, diríase, con dos simples contratos, terminaría pagando más de un millón en trámites de Cámara de Comercio, cuando éstos deberían estar completamente diferenciados por el tipo de empresa y el tipo de contrato (entiéndase, pues, que personas naturales o jurídicas contratistas de mayores cuantías deberían pagar mayores costos de RUP tal y como sucede con la renovación de matrícula, mientras que empresas más pequeñas deberían tener mayores facilidades). Incluso, una empresa que apenas está iniciando y decida ingresar a contratos de licitación con objeto contractual barato, por su misma naturaleza de ejecución rápida por un pequeño valor, podría llegar a estar actualizando más de dos veces el RUP en un solo año, por lo que los costos serían mucho mayores.

Sobre esto, vale la pena decir que la mayoría de las Mipymes, como se mencionó, contratan directamente con el Estado y que éstos no requieren registro del RUP. No obstante, en esta mayoría de casos hay otra desventaja y es que como el RUP tiene un sistema de antigüedad que se va sumando con los años y con los contratos que se ejecuta con el Estado, sucede que una empresa de este tipo, una vez ha crecido lo suficiente para acceder a una licitación pública, aparecería como apenas iniciando el registro de antigüedad en el RUP cuando en la práctica ya puede llevar varios años contratando directamente con el Estado. En ese sentido, se busca balancear dicha carga y dar primacía de la realidad sobre las formas para que una micro y pequeña, una vez acceda por primera vez al RUP, se le cuente como antigüedad los años que ha contratado con el Estado así sea por contratación directa.

Esto, pues, justifica la última de las medidas que propone este proyecto de ley en torno a la reducción y diferenciación de los costos asociados al RUP.

5. FUNDAMENTOS LEGISLATIVOS

Las normas que soportan jurídicamente el presente proyecto de ley, muchas de ellas ya citadas y mencionadas en la explicación del problema a resolver y de las medidas específicas que se plantean, se encuentran todas alrededor del tejido empresarial y sector comercio. En primer lugar, habiendo suficiente ilustración sobre la iniciativa y autonomía legislativa del Congreso incluida en la Constitución Política y en la Ley 5 para modificar asuntos de forma sobre la normatividad tributaria del país, al igual que sobre otros asuntos legales modificables por medio de ley ordinaria; se presentan algunas de las principales normas que enmarcan la presente discusión:

- Estatuto Tributario (Decreto Ley 824 de 1989).
- Decreto Único Reglamentario del sector Comercio, Industria y Turismo (Decreto 1074 de 2015).
- Decreto sobre clasificación empresarial (Decreto 975 de 2019).
- Regulación sobre Régimen SIMPLE (Ley 2010 de 2019).
- Ley de Emprendimiento (Ley 2069 de 2020).
- Contratación pública (Ley 80 de 1993 y Ley 1150 de 2007).

5.1 Conflicto de intereses

En virtud de lo estipulado en la Ley 2003 de 2019 que modificó la Ley 5, se deja establecido que el presente proyecto de ley no genera conflicto de interés en tanto no crea beneficios particulares, actuales y directos a los congresistas. Lo anterior como regla general, por lo que esto no obsta o libra de responsabilidad a cada honorable congresista para presentar el impedimento que considere necesario según su situación particular.

5.2 Impacto fiscal

De igual forma, en cumplimiento de la Ley 5ta para la revisión del presente proyecto de ley, se deja establecido mediante esta ponencia que este proyecto no genera impacto fiscal en tanto las medidas alrededor del SIMPLE son medidas de trámite y de incentivos ya creados por el ordenamiento tributario a iniciativa del Gobierno que no modificarían los valores recaudados de la Nación y provienen de acuerdos en mesas técnicas con la DIAN; así como los asuntos relativos al RUP son sobre los derechos fraguados en favor de las Cámaras de Comercio y a la declaración del IVA para los

inscritos en el SIMPLE no reduce en absoluto el recaudo de la Nación pues versa sobre incentivos de trámite ante el pago y proviene igualmente de acuerdos en mesas técnicas con la DIAN.

6. ESTUDIO DE ARTICULADO

Durante la realización de la ponencia para primer debate del pasado proyecto de ley radicado (Proyecto 567 de 2021C) se surtieron varias reuniones y mesas técnicas con el propósito de obtener una justificación suficiente y construir consenso para el presente proyecto. Un resumen de las conclusiones de la mesa técnica:

- Mesa técnica con el equipo de la DIAN

Desde la presentación del proyecto en la Cámara se han sostenido varias reuniones con el equipo técnico que lidera el régimen SIMPLE en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) con el objetivo de recibir conceptos, retroalimentaciones y llegar a consensos alrededor del articulado. En general el balance de las reuniones es positivo y ha permitido llegar a consensos en cada uno de los artículos relativos al SIMPLE y a las medidas del IVA que fueron acogidos y que se presentan en el pliego de modificaciones para el articulado propuesto a primer debate con apoyo técnico del equipo de la DIAN. Los resultados de las mesas técnicas consisten en los siguientes consensos:

- Se integra la propuesta de la mesa en torno a hacer extensivo y más amplio el beneficio incluido en el artículo 114-1 del Estatuto Tributario para la exoneración de parafiscales y aportes en salud a los contribuyentes del SIMPLE.
- Se ajusta la integración del régimen de Seguridad Social con el Régimen SIMPLE no en un único pago sino en interoperabilidad y trámite conjunto que organice el Gobierno Nacional; y se propone un cambio de integración de los pagos entre la factura de nómina electrónica y la planilla PILA administrada por las operadoras autorizadas. Se deja en potestad de la DIAN esta gestión según su recomendación.
- Se ajusta la fecha máxima de inscripción en el SIMPLE al 28 de febrero según sugerencia de la DIAN.
- Se da aplicabilidad al alivio de caja establecido alrededor de la declaración del IVA para los contribuyentes del régimen SIMPLE en su declaración anual consolidada dentro de los dos meses de la presentación sin el cobro de intereses moratorios y premiando a las empresas que presenten a tiempo la declaración.

De igual forma, para el anterior proyecto 567 de 2021C se recibieron los siguientes conceptos:

- Concepto del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

Desde el Ministerio resaltan la importancia que tiene el proyecto de ley para contribuir al fortalecimiento del tejido empresarial del país en torno a la reactivación económica. En torno al articulado original del proyecto, exponen entre otros los siguientes puntos:

- Que en las propuestas de integración en torno al Sistema de Seguridad Social y el Régimen SIMPLE de Tributación se revisen

las facultades de intercambio de información entre la DIAN y las operadoras y así ajustar el articulado dando claridad sobre dicha medida.

- Sobre las medidas en torno al RUP, mencionan que se ha adelantado un proceso de simplificación de trámites alrededor del CONPES 4023 (Política de Reactivación).
- Alrededor de la medida del IVA, establecen que se apoyaría el flujo de caja de las Mipymes y que se requiere concepto de la DIAN.

- Concepto de Confecámaras

El equipo de Confecámaras manifiesta la importancia de que las Mipymes tengan mayor acceso al mercado de las compras públicas y reconozcan a la ley de emprendimiento como una herramienta para impulsar dicha iniciativa. Sobre el artículo concerniente a la diversificación de los costos del RUP por tamaño empresarial, hacen una revisión de las diferentes causales según las cuales las micro y pequeñas empresas no acceden al mercado y consideran otras barreras.

En ese sentido, proponen para el artículo de incentivo a las compras públicas:

- Establecer un mecanismo denominado de RUP Simplificado aplicable para las Mipymes en el cual éstas puedan ingresar y adquirir los beneficios del registro (anterioridad y antigüedad) con tarifas diferenciadas para todos los contratos directos que celebren; contratos que actualmente no cuentan con la obligación de pago por RUP. De igual forma, solicitan que la diversificación por tamaño empresarial de los costos del RUP lo realice el Gobierno Nacional.

- Concepto ANDI

Manifiestan que comparten la finalidad del proyecto en incentivar la formalización y la liquidez de las empresas para la reducción de los costos asociados a su gestión. Resaltan la importancia de que todas las obligaciones (alrededor de seguridad social y otros pagos de ley) estén incluidos en un único pago que funcione como monotributo. En torno al articulado original del proyecto, consideran importante establecer tarifas diferenciadas del RUP con reducción de costos para las empresas. Sobre las medidas alrededor del SIMPLE, argumentan que la implementación de este régimen es reciente en Colombia y que preferían un tiempo para dar aplicabilidad a las medidas.

7. PLIEGO DE MODIFICACIONES

Surtidas las diferentes reuniones entre los ponentes y las principales entidades y actores asociados al proyecto de ley, se propusieron las siguientes modificaciones para llegar a un punto en común frente a algunas de las propuestas de éstos y frente a lo que los gremios empresariales y las Mipymes solicitan.

TEXTO ORIGINAL	TEXTO MODIFICADO	OBSERVACIÓN
Artículo 1° Objeto -La presente ley tiene por objeto contribuir al proceso de reactivación económica del país a través de	Artículo 1° Objeto -La presente ley tiene por objeto contribuir al proceso de reactivación económica del país a través de	Se agrega la finalidad de igualdad de condiciones entre personas naturales y jurídicas en el Régimen

económica del país a través de medidas que buscan generar alivios de liquidez para las empresas, formalización con incentivos tributarios del Régimen Simple de Tributación y fomento del empleo formal. Las disposiciones aquí incluidas se entenderán aplicables a toda persona natural o jurídica según la legislación vigente en la materia.	medidas que buscan generar alivios de liquidez para las empresas, formalización con incentivos tributarios del Régimen Simple de Tributación y fomento del empleo formal. Las disposiciones aquí incluidas se entenderán aplicables a toda persona natural o jurídica según la legislación vigente en la materia. <i>Para los efectos de la presente ley, se entenderá como Mipyme a las empresas definidas en el artículo 2° de la Ley 590 de 2010 y en el Decreto 972 de 2010 que lo desarrolló.</i>	Simple según las conclusiones de la mesa técnica con la DIAN. Se agrega un segundo inciso haciendo concordancia de la definición legal y reglamentaria ya existente sobre Mipymes.
--	---	---

Artículo 2°. Beneficios de aportes a los contribuyentes del Régimen SIMPLE - Modifíquese parcialmente el parágrafo tercero del artículo 903 del Decreto 624 de 1989, creado por el artículo 74 de la Ley 2010 de 2010, el cual quedará así:	Artículo 2°. Beneficios de aportes a los contribuyentes del Régimen SIMPLE - Modifíquese parcialmente el parágrafo tercero del artículo 903 del Decreto 624 de 1989, creado por el artículo 74 de la Ley 2010 de 2010, el cual quedará así:	Se ajusta la redacción del texto para dejar más clara la aplicación del beneficio y la obligación de que en las plataformas de pago PILA, la opción esté habilitada por defecto o automáticamente para estos contribuyentes.
---	---	--

PARÁGRAFO 3o. Los contribuyentes que opten por acogerse al impuesto unificado bajo el Régimen Simple de Tributación - Simple deberán realizar los respectivos aportes al Sistema General de Pensiones de conformidad con la legislación vigente y estarán exonerados de aportes parafiscales en los términos del artículo 114-1 del Estatuto Tributario. Los contribuyentes inscritos en este régimen estarán exonerados de las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud y los aportes parafiscales de que trata el artículo 114-1 del Estatuto Tributario, que aplicará incluso a personas que empleen desde un trabajador en adelante. Para ello, las entidades públicas competentes y los operadores de liquidación de aportes y operadores PILA realizarán los ajustes necesarios en sus plataformas de pago con el fin de que se habilite por defecto la exoneración para dichos contribuyentes.	PARÁGRAFO 3o. Los contribuyentes que opten por acogerse al impuesto unificado bajo el Régimen Simple de Tributación - Simple deberán realizar los respectivos aportes al Sistema General de Pensiones de conformidad con la legislación vigente y estarán exonerados de aportes parafiscales en los términos del artículo 114-1 del Estatuto Tributario, quienes estarán exonerados de las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud y los aportes parafiscales de que trata el artículo 114-1 del Estatuto Tributario, que aplicará a personas naturales y jurídicas que empleen desde un trabajador en adelante. Para ello, las entidades públicas competentes y los operadores de liquidación de aportes y operadores PILA realizarán los ajustes necesarios en sus plataformas de pago con el fin de que se habilite automáticamente la exoneración cuando se trate de estos contribuyentes.	
---	---	--

Artículo 3°. Integración electrónica del Régimen	Artículo 3°. Integración electrónica del Régimen	Por sugerencia de técnica legislativa y jurídica, el
--	--	--

SIMPLE con el Sistema de Seguridad Social - Adiciónase los parágrafos al artículo 903 del Decreto 624 de 1989, creado por el artículo 74 de la Ley 2010 de 2010, los cuales quedarán así: PARÁGRAFO TRANSITORIO. El Gobierno Nacional deberá diseñar, reglamentar e implementar antes del 31 de diciembre de 2020, para iniciar en el año gravable 2021, un mecanismo electrónico de integración entre las obligaciones que por concepto de Seguridad Social y aportes parafiscales deban pagar los contribuyentes con el recibo electrónico del régimen simple de tributación - SIMPLE, en los términos que establece el reglamento. Dicha integración tendrá como propósito agilizar el recibo, simplificar trámites y reducir costos de transacción para los contribuyentes inscritos en el régimen SIMPLE mediante un único trámite.	SIMPLE con el Sistema de Seguridad Social - El Gobierno Nacional deberá diseñar, reglamentar e implementar antes del 31 de diciembre de 2020, un mecanismo electrónico de integración entre las obligaciones que por concepto de Seguridad Social y aportes parafiscales deban pagar los contribuyentes con el recibo electrónico del régimen simple de tributación - SIMPLE, en los términos que establece el reglamento. Dicha integración tendrá como propósito agilizar el recibo, simplificar trámites y reducir costos de transacción para los contribuyentes inscritos en el régimen SIMPLE mediante un único trámite. Para lograr este objetivo de simplificación en un único trámite y de reducción de costos de transacción, el Gobierno Nacional, en cabeza de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, deberá expedir la reglamentación y acortar las gestiones necesarias para garantizar la interoperabilidad e integración entre la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes -PILA- la nómina electrónica y el recibo electrónico del régimen SIMPLE.	artículo se establece de manera independiente y no como parágrafos adicionales del estatuto tributario. Se clarifica la obligación de reglamentar la materia en el inciso segundo.
--	--	--

Artículo 4°. Plazo de inscripción anual en el Régimen Simple - Modifíquese parcialmente artículo 909 del Decreto 624 de 1989, creado por el artículo 74 de la Ley 2010 de 2010, el cual quedará así: Artículo 909. Inscripción al impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación - simple. Los contribuyentes que opten por acogerse al impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación - SIMPLE deberán inscribirse en el Registro Único Tributario (RUT) como	Artículo 4°. Plazo de inscripción anual en el Régimen Simple - Modifíquese parcialmente artículo 909 del Decreto 624 de 1989, creado por el artículo 74 de la Ley 2010 de 2010, el cual quedará así: Artículo 909. Inscripción al impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación - simple. Los contribuyentes que opten por acogerse al impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación - SIMPLE deberán inscribirse en el Registro Único Tributario (RUT) como contribuyentes del SIMPLE hasta el 28 del mes de	Queda igual.
---	--	--------------

contribuyentes del SIMPLE hasta el 28 del mes de febrero del año gravable para el que ejerce la opción. Para los contribuyentes que se inscriban por primera vez en el Registro Único Tributario (RUT), deberán indicar en el formulario de inscripción su intención de acogerse a este régimen. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), consolidará mediante Resolución el listado de contribuyentes que se acogieron al régimen simple de tributación - SIMPLE. Para subsanar el pago del anticipo bimestral correspondiente al bimestre anterior a su inscripción, deberán incluir los ingresos en el primer recibo electrónico SIMPLE de pago del anticipo bimestral, sin que se causen sanciones o intereses. Quienes se inscriban como contribuyentes del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación - SIMPLE no estarán sometidos al régimen ordinario del impuesto sobre la renta por el respectivo año gravable. Una vez ejercida la opción, la misma debe mantenerse para ese año gravable, sin perjuicio de que para el año gravable siguiente se pueda optar nuevamente por el régimen ordinario, antes del último día hábil del mes de enero del año gravable para el que se ejerce la opción.	febrero del año gravable para el que ejerce la opción. Para los contribuyentes que se inscriban por primera vez en el Registro Único Tributario (RUT), deberán indicar en el formulario de inscripción su intención de acogerse a este régimen. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), consolidará mediante Resolución el listado de contribuyentes que se acogieron al régimen simple de tributación - SIMPLE. Para subsanar el pago del anticipo bimestral correspondiente al bimestre anterior a su inscripción, deberán incluir los ingresos en el primer recibo electrónico SIMPLE de pago del anticipo bimestral, sin que se causen sanciones o intereses. Quienes se inscriban como contribuyentes del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación - SIMPLE no estarán sometidos al régimen ordinario del impuesto sobre la renta por el respectivo año gravable. Una vez ejercida la opción, la misma debe mantenerse para ese año gravable, sin perjuicio de que para el año gravable siguiente se pueda optar nuevamente por el régimen ordinario, antes del último día hábil del mes de enero del año gravable para el que se ejerce la opción.	
---	--	--

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) podrá establecer mecanismos simplificados de renovación de la inscripción del Registro Único Tributario (RUT). PARÁGRAFO. Quienes inician actividades en el año gravable, podrán inscribirse en el régimen SIMPLE en el momento del registro inicial en el Registro Único Tributario (RUT). PARÁGRAFO TRANSITORIO 1o. Únicamente por el año 2020, quienes cumplan los requisitos para optar por este régimen podrán hacerlo hasta el 31 de julio de dicho año. Para subsanar el pago del anticipo bimestral correspondiente a los	La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) podrá establecer mecanismos simplificados de renovación de la inscripción del Registro Único Tributario (RUT). PARÁGRAFO. Quienes inician actividades en el año gravable, podrán inscribirse en el régimen SIMPLE en el momento del registro inicial en el Registro Único Tributario (RUT). PARÁGRAFO TRANSITORIO 1o. Únicamente por el año 2020, quienes cumplan los requisitos para optar por este régimen podrán hacerlo hasta el 31 de julio de dicho año. Para	
---	---	--

<p>bimestres anteriores a su inscripción, deberán incluir los ingresos en el primer recibo electrónico SIMPLE de pago del anticipo bimestral, sin que se causen sanciones o intereses.</p> <p>Si en los bimestres previos a la inscripción en el régimen simple de tributación, el contribuyente pagó el impuesto al consumo y/o el impuesto de industria y comercio y avisos y tableros, impuesto sobre las ventas - IVA o estuvo sujeto a retenciones o auto retenciones en la fuente, por su actividad empresarial, dichas sumas podrán descontarse del valor a pagar por concepto de anticipo de los recibos electrónicos del Simple que sean presentados en los bimestres siguientes.</p> <p>PARÁGRAFO TRANSITORIO 2o. Quienes a la entrada en vigencia de la presente ley hayan cumplido con los requisitos para optar por el régimen SIMPLE y se hayan inscrito dentro de los plazos establecidos para el efecto, no tendrán que volver a surtir dicho trámite para el año 2020. Lo anterior, siempre que los contribuyentes quieran continuar en el régimen SIMPLE durante dicha vigencia.</p>	<p>subsanar el pago del anticipo bimestral correspondiente a los bimestres anteriores a su inscripción, deberán incluir los ingresos en el primer recibo electrónico SIMPLE de pago del anticipo bimestral, sin que se causen sanciones o intereses.</p> <p>Si en los bimestres previos a la inscripción en el régimen simple de tributación, el contribuyente pagó el impuesto al consumo y/o el impuesto de industria y comercio y avisos y tableros, impuesto sobre las ventas - IVA o estuvo sujeto a retenciones o auto retenciones en la fuente, por su actividad empresarial, dichas sumas podrán descontarse del valor a pagar por concepto de anticipo de los recibos electrónicos del Simple que sean presentados en los bimestres siguientes.</p> <p>PARÁGRAFO TRANSITORIO 2o. Quienes a la entrada en vigencia de la presente ley hayan cumplido con los requisitos para optar por el régimen SIMPLE y se hayan inscrito dentro de los plazos establecidos para el efecto, no tendrán que volver a surtir dicho trámite para el año 2020. Lo anterior, siempre que los contribuyentes quieran continuar en el régimen SIMPLE durante dicha vigencia.</p>	<p>de manera extemporánea, el pago total de las sumas recaudadas por dicho concepto deberá efectuarse en el momento de la presentación; de lo contrario, la declaración no producirá efecto legal alguno, sin necesidad de acto administrativo que así lo declare.</p>
<p>Artículo 5°. Alivios de caja para contribuyentes del SIMPLE - Adiciónese un párrafo al artículo 915 del Decreto 624 de 1989, el cual quedará así:</p> <p>PARÁGRAFO. Los contribuyentes inscritos en el Régimen Simple de Tributación "SIMPLE" que presenten la declaración anual consolidada del impuesto sobre las ventas antes de la fecha que determine el Gobierno Nacional, podrán realizar el pago dentro de los dos meses siguientes a la presentación de la misma sin que se generen intereses de mora. Si la declaración anual consolidada del impuesto sobre las ventas se presenta</p>	<p>Artículo 5°. Alivios de caja para contribuyentes del SIMPLE - Adiciónese un párrafo al artículo 915 del Decreto 624 de 1989, el cual quedará así:</p> <p>PARÁGRAFO. Los contribuyentes inscritos en el Régimen Simple de Tributación "SIMPLE" que presenten la declaración anual consolidada del impuesto sobre las ventas antes de la fecha que determine el Gobierno Nacional, podrán realizar el pago dentro de los dos meses siguientes a la presentación de la misma sin que se generen intereses de mora. Si la declaración anual consolidada del impuesto sobre las ventas se presenta</p>	<p>Queda igual.</p>

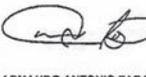
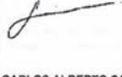
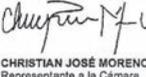
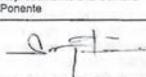
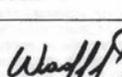
<p>de manera extemporánea, el pago total de las sumas recaudadas por dicho concepto deberá efectuarse en el momento de la presentación; de lo contrario, la declaración no producirá efecto legal alguno, sin necesidad de acto administrativo que así lo declare.</p>	<p>de manera extemporánea, el pago total de las sumas recaudadas por dicho concepto deberá efectuarse en el momento de la presentación; de lo contrario, la declaración no producirá efecto legal alguno, sin necesidad de acto administrativo que así lo declare.</p>	<p>Se agrega un artículo nuevo que busca la socialización de las medidas incluidas en el presente proyecto de ley según estudio de los ponentes.</p>
<p>Artículo Nuevo</p>	<p>Artículo 6°. Socialización de medidas. - El Gobierno Nacional en cabeza de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), adelantará una estrategia de socialización dirigida a las Mipymes que busque informar a las personas naturales o jurídicas sobre las nuevas medidas, beneficios y facilidades que ofrece la presente ley alrededor del Régimen Simple de Tributación y demás.</p>	<p>Se agrega un artículo nuevo que busca la socialización de las medidas incluidas en el presente proyecto de ley según estudio de los ponentes.</p>
<p>Artículo 6°. Fomento al empleo formal - Los municipios podrán acogerse al siguiente modelo para incentivar la creación de empleo formal en su territorio:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Empresas que creen entre 1 y 10 empleos nuevos demostrables podrán descontarse hasta un 10% de su impuesto de ICA. - Empresas que creen entre 11 y 30 empleos nuevos demostrables podrán descontarse hasta un 20% en su impuesto de ICA. - Empresas que creen más de 30 empleos nuevos demostrables podrán descontarse hasta un 30% en su impuesto de ICA. 	<p>Artículo 7°. Fomento al empleo formal - Los municipios podrán acogerse al siguiente modelo para incentivar la creación de empleo formal en su territorio:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Empresas que creen entre 1 y 10 empleos nuevos demostrables podrán descontarse hasta un 10% de su impuesto de ICA. - Empresas que creen entre 11 y 30 empleos nuevos demostrables podrán descontarse hasta un 20% en su impuesto de ICA. - Empresas que creen más de 30 empleos nuevos demostrables podrán descontarse hasta un 30% en su impuesto de ICA. 	<p>Se corrige la numeración.</p>
<p>Para obtener dicho beneficio, el contribuyente del impuesto de industria y comercio deberá aportar a la autoridad municipal los documentos anexos que soporten la vinculación y cotización de seguridad social en la planilla PILA de los nuevos trabajadores. Para hacer la respectiva verificación, se tomará como referencia el número de empleados que tenga el contribuyente al momento de solicitud del</p>	<p>Para obtener dicho beneficio, el contribuyente del impuesto de industria y comercio deberá aportar a la autoridad municipal los documentos anexos que soporten la vinculación y cotización de seguridad social en la planilla PILA de los nuevos trabajadores. Para hacer la respectiva verificación, se tomará como referencia el número de empleados que tenga el contribuyente al momento de solicitud del</p>	<p>Para obtener dicho beneficio, el contribuyente del impuesto de industria y comercio deberá aportar a la autoridad municipal los documentos anexos que soporten la vinculación y cotización de seguridad social en la planilla PILA de los nuevos trabajadores. Para hacer la respectiva verificación, se tomará como referencia el número de empleados que tenga el contribuyente al momento de solicitud del</p>

<p>beneficio, en comparación al año inmediatamente anterior. Para acceder a este beneficio el contribuyente deberá estar al día con los pagos del impuesto de industria y comercio.</p> <p>El municipio definirá, según sus particularidades fiscales, el periodo de vigencia que durará dicho beneficio, así como el periodo de solicitud para los contribuyentes, los porcentajes del beneficio y número de empleos requeridos, y los demás trámites requeridos para el acceso al mismo. Esto se deberá hacer en virtud de los principios de celeridad, eficiencia y equidad.</p>	<p>beneficio, en comparación al año inmediatamente anterior. Para acceder a este beneficio el contribuyente deberá estar al día con los pagos del impuesto de industria y comercio.</p> <p>El municipio definirá, según sus particularidades fiscales, el periodo de vigencia que durará dicho beneficio, así como el periodo de solicitud para los contribuyentes, los porcentajes del beneficio y número de empleos requeridos, y los demás trámites requeridos para el acceso al mismo. Esto se deberá hacer en virtud de los principios de celeridad, eficiencia y equidad.</p>	<p>Se corrige la numeración.</p>
<p>Artículo 7°. Alivios e incentivos a las compras públicas para las Mipymes - Modifíquese el párrafo 3° y adiciónese un párrafo al artículo 6 de la Ley 1150 de 2007, desarrollado por el artículo 2.2.2.46.1.7 del Decreto 1074 de 2015, el cual quedará así:</p> <p>Parágrafo 3°. Las tarifas correspondientes al registro único de proponentes que deban sufragarse en favor de las Cámaras de Comercio quedarán establecidas de la siguiente forma:</p>	<p>Artículo 8°. Alivios e incentivos a las compras públicas para las Mipymes - Modifíquese el párrafo 3° y adiciónese un párrafo al artículo 6 de la Ley 1150 de 2007, desarrollado por el artículo 2.2.2.46.1.7 del Decreto 1074 de 2015, el cual quedará así:</p> <p>Parágrafo 3°. Las tarifas correspondientes al registro único de proponentes que deban sufragarse en favor de las Cámaras de Comercio quedarán establecidas de la siguiente forma:</p>	<p>Se corrige la numeración.</p>
<p>Parágrafo 4°. Con el fin de simplificar las cargas para las micro y pequeñas empresas la anterioridad del Registro Único de Proponentes contra de manera retroactiva, únicamente al momento de inscripción por primera vez los años previos al ingreso en que estas empresas hayan contratado directamente con el Estado. Si una vez inscrita en el Registro la micro y pequeña empresa no cumple con su obligación de renovación y actualización, perderá el beneficio de retroactividad.</p>	<p>Parágrafo 4°. Con el fin de simplificar las cargas para las micro y pequeñas empresas la anterioridad del Registro Único de Proponentes contra de manera retroactiva, únicamente al momento de inscripción por primera vez los años previos al ingreso en que estas empresas hayan contratado directamente con el Estado. Si una vez inscrita en el Registro la micro y pequeña empresa no cumple con su obligación de renovación y actualización, perderá el beneficio de retroactividad.</p>	<p>Se corrige la numeración.</p>
<p>Artículo 8°. Vigencia y derogatorias. La presente ley rige a partir de la fecha de su promulgación y deroga las normas que le sean contrarias.</p>	<p>Artículo 9°. Vigencia y derogatorias. La presente ley rige a partir de la fecha de su promulgación y deroga las normas que le sean contrarias.</p>	<p>Se corrige la numeración.</p>

8. PROPOSICIÓN

Con fundamento en las anteriores consideraciones, presentamos a Usted y a la Honorable Comisión Tercera la presente ponencia positiva para dar trámite y aprobación al primer debate del Proyecto de Ley 152 de 2021 "Por medio del cual se dictan disposiciones para incentivar alivios para empresas y contribuir a la reactivación económica".

De los Honorables Congresistas,

 ARMANDO ANTONIO ZABARAÍN D' ARCE Representante a la Cámara Coordinador Ponente	 CARLOS ALBERTO CARREÑO MARÍN Representante a la Cámara Coordinador Ponente
 CHRISTIAN JOSÉ MORENO VILLAMIZAR Representante a la Cámara Ponente	 KATHERINE MIRANDA PEÑA Representante a la Cámara Ponente
 DAVID RICARDO RACERO MAYORCA Representante a la Cámara Ponente	 VÍCTOR MANUEL ORTIZ JOYA Representante a la Cámara Ponente
 BAYARDO GILBERTO BETANCOURT PÉREZ Representante a la Cámara Ponente	 WADITH ALBERTO MANZUR IMBETT Representante a la Cámara Ponente

TEXTO PROPUESTO PARA PRIMER DEBATE

Proyecto de Ley 152 de 2021 - Cámara

"Por medio del cual se dictan disposiciones para incentivar alivios para empresas y contribuir a la reactivación económica"

EL CONGRESO DE COLOMBIA

Decreto:

Artículo 1° Objeto - La presente ley tiene por objeto contribuir al proceso de reactivación económica del país a través de medidas que buscan generar alivios de liquidez para las empresas, formalización con incentivos tributarios del Régimen Simple de Tributación y fomento del empleo formal; poniendo en igualdad de condiciones tanto a personas naturales como jurídicas. Las disposiciones aquí incluidas se entenderán aplicables a toda persona natural o jurídica según la legislación vigente en la materia.

Para los efectos de la presente ley, se entenderán como Mipymes aquellas empresas definidas en el artículo 2° de la Ley 590 de 2000 y en el Decreto 975 de 2019 que lo desarrolló.

Artículo 2°. Beneficios de aportes a los contribuyentes del Régimen SIMPLE - Modifíquese parcialmente el parágrafo tercero del artículo 903 del Decreto 624 de 1989, creado por el artículo 74 de la Ley 2010 de 2019, el cual quedará así:

PARÁGRAFO 3o. Los contribuyentes que opten por acogerse al impuesto unificado bajo el Régimen Simple de Tributación - Simple deberán realizar los respectivos aportes al Sistema General de Pensiones de conformidad con la legislación vigente y estarán exonerados de aportes parafiscales en los términos del artículo 114-4 del Estatuto Tributario; quienes estarán exonerados de las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud y a los aportes parafiscales de que trata el artículo 114-1 del Estatuto Tributario, que aplicará a personas naturales o jurídicas que empleen desde un trabajador en adelante. Para ello, las entidades públicas competentes y los operadores de liquidación de aportes u operadores PILA realizarán los ajustes necesarios en sus plataformas de pago con el fin de que se habilite automáticamente la exoneración cuando se trate de estos contribuyentes.

Artículo 3°. Integración electrónica del Régimen SIMPLE con el Sistema de Seguridad Social - El Gobierno Nacional deberá diseñar, reglamentar e implementar antes del 31 de diciembre de 2025, para iniciar en el año gravable 2026, un mecanismo electrónico de unificación entre las obligaciones que por concepto de Seguridad Social y aportes parafiscales deban pagar los contribuyentes, con el recibo electrónico del régimen simple de tributación - SIMPLE, en los términos que establezca el reglamento. Dicha integración tendrá como propósito agilizar el recaudo, simplificar trámites y reducir costos de transacción para los contribuyentes inscritos en el régimen SIMPLE mediante un único trámite.

Para lograr este objetivo de simplificación en un único trámite y de reducción de costos de transacción; el Gobierno Nacional, en cabeza de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, deberá expedir la reglamentación y adelantar las gestiones

y se hayan inscrito dentro de los plazos establecidos para el efecto, no tendrán que volver a surtir dicho trámite para el año 2020. Lo anterior, siempre que los contribuyentes quieran continuar en el régimen SIMPLE durante dicha vigencia.

Artículo 5°. Alivios de caja para contribuyentes del SIMPLE - Adiciónese un parágrafo al artículo 915 del Decreto 624 de 1989, el cual quedará así:

PARÁGRAFO. Los contribuyentes inscritos en el Régimen Simple de Tributación -SIMPLE- que presenten la declaración anual consolidada del impuesto sobre las ventas antes de la fecha que determine el Gobierno Nacional, podrán realizar el pago dentro de los dos meses siguientes a la presentación de la misma sin que se generen intereses de mora. Si la declaración anual consolidada del impuesto sobre las ventas se presenta de manera extemporánea, el pago total de las sumas recaudadas por dicho concepto deberá efectuarse en el momento de la presentación; de lo contrario, tal declaración no producirá efecto legal alguno sin necesidad de acto administrativo que así lo declare.

Artículo 6°. Socialización de nuevas medidas - El Gobierno Nacional, en cabeza de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN-, adelantará una estrategia de socialización dirigida a las Mipymes que busque informar a las personas naturales o jurídicas sobre las nuevas medidas, beneficios y facilidades que incluye la presente ley alrededor del Régimen Simple de Tributación y demás.

Artículo 7°. Fomento al empleo formal - Los municipios podrán acogerse al siguiente modelo para incentivar la creación de empleo formal en su territorio:

- Empresas que creen entre 1 y 10 empleos nuevos demostrables podrán descontarse hasta un 10% de su impuesto de ICA.
- Empresas que creen entre 11 y 30 empleos nuevos demostrables podrán descontarse hasta un 20% en su impuesto de ICA.
- Empresas que creen más de 30 empleos nuevos demostrables podrán descontarse hasta un 30% en su impuesto de ICA.

Para obtener dicho beneficio, el contribuyente del impuesto de industria y comercio deberá aportar a la autoridad municipal los documentos anexos que soporten la vinculación y cotización de seguridad social en la planilla PILA de los nuevos trabajadores. Para hacer la respectiva verificación, se tomará como referencia el número de empleados que tenga el contribuyente al momento de solicitud del beneficio, en comparación al año inmediatamente anterior. Para acceder a este beneficio el contribuyente deberá estar al día con los pagos del impuesto de industria y comercio.

El municipio definirá, según sus particularidades fiscales, el periodo de vigencia que durará dicho beneficio, así como el periodo de solicitud para los contribuyentes, los porcentajes del beneficio y número de empleos requeridos, y los demás trámites requeridos para el acceso al mismo. Esto se deberá hacer en virtud de los principios de celeridad, eficiencia y equidad.

Artículo 8°. Alivios e incentivos a las compras públicas para las Mipymes - Modifíquese el parágrafo 3° y adiciónese un parágrafo al artículo 6 de la Ley 1150 de 2007, desarrollado por el artículo 2.2.2.46.1.7 del Decreto 1074 de 2015, el cual quedará así:

necesarias para garantizar la interoperabilidad e integración entre la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes -PILA-, la nómina electrónica y el recibo electrónico del régimen SIMPLE.

Artículo 4°. Plazo de inscripción anual en el Régimen Simple - Modifíquese parcialmente artículo 909 del Decreto 624 de 1989, creado por el artículo 74 de la Ley 2010 de 2019, el cual quedará así:

Artículo 909. Inscripción al Impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación - simple. Los contribuyentes que opten por acogerse al impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación - SIMPLE deberán inscribirse en el Registro Único Tributario (RUT) como contribuyentes del SIMPLE hasta el 28 del mes de febrero del año gravable para el que ejerce la opción. Para los contribuyentes que se inscriban por primera vez en el Registro Único Tributario (RUT), deberán indicar en el formulario de inscripción su intención de acogerse a este régimen. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), consolidará mediante Resolución el listado de contribuyentes que se acogieron al régimen simple de tributación - SIMPLE. Para subsanar el pago del anticipo bimestral correspondiente al bimestre anterior a su inscripción, deberán los contribuyentes incluir los ingresos en el primer recibo electrónico SIMPLE de pago del anticipo bimestral, sin que se causen sanciones o intereses.

Quienes se inscriban como contribuyentes del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación - SIMPLE no estarán sometidos al régimen ordinario del impuesto sobre la renta por el respectivo año gravable. Una vez ejercida la opción, la misma debe mantenerse para ese año gravable, sin perjuicio de que para el año gravable siguiente se pueda optar nuevamente por el régimen ordinario, antes del último día hábil del mes de enero del año gravable para el que se ejerce la opción.

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) podrá establecer mecanismos simplificados de renovación de la inscripción del Registro Único Tributario (RUT).

PARÁGRAFO. Quienes inicien actividades en el año gravable, podrán inscribirse en el régimen SIMPLE en el momento del registro inicial en el Registro Único Tributario (RUT).

PARÁGRAFO TRANSITORIO 1o. Únicamente por el año 2020, quienes cumplan los requisitos para optar por este régimen podrán hacerlo hasta el 31 de julio de dicho año. Para subsanar el pago del anticipo bimestral correspondiente a los bimestres anteriores a su inscripción, deberán incluir los ingresos en el primer recibo electrónico SIMPLE de pago del anticipo bimestral, sin que se causen sanciones o intereses.

Si en los bimestres previos a la inscripción en el régimen simple de tributación, el contribuyente pagó el impuesto al consumo y/o el impuesto de industria y comercio y avisos y tableros, impuesto sobre las ventas - IVA o estuvo sujeto a retenciones o auto retenciones en la fuente, por su actividad empresarial, dichas sumas podrán descontarse del valor a pagar por concepto de anticipo de los recibos electrónicos del Simple que sean presentados en los bimestres siguientes.

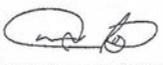
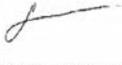
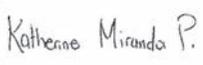
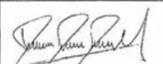
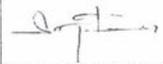
PARÁGRAFO TRANSITORIO 2o. Quienes a la entrada en vigencia de la presente ley hayan cumplido con los requisitos para optar por el régimen SIMPLE

Parágrafo 3°. Las tarifas correspondientes al registro único de proponentes que deban sufragarse en favor de las Cámaras de Comercio quedarán establecidas de la siguiente forma:

Ingresos brutos anuales [UVT]	Conceptos RUP [UVT]				
	Inferior	Inscripción y renovación	Actualización	Certificados	Copias
Igual o superior					
0	131.951	5	2	0,6	0,08
131.951	483.034	10	4	1	0,08
483.034	-	16,17	8,64	1,46	0,08

Parágrafo 4°. Con el fin de simplificar las cargas para las micro y pequeñas empresas la anterioridad del Registro Único de Proponentes contará de manera retroactiva, únicamente al momento de inscripción por primera vez, los años previos al ingreso en que estas empresas hayan contratado directamente con el Estado. Si una vez inscrita en el Registro, la micro y pequeña empresa no cumple con su obligación de renovación y actualización, perderá el beneficio de retroactividad.

Artículo 9°. Vigencia y derogatorias. La presente ley rige a partir de la fecha de su promulgación y deroga las normas que le sean contrarias.

 ARMANDO ANTONIO ZABARAÍN D'ARCE Representante a la Cámara Coordinador Ponente	 CARLOS ALBERTO CARREÑO MARÍN Representante a la Cámara Coordinador Ponente
 CHRISTIAN JOSÉ MORENO VILLAMIZAR Representante a la Cámara Ponente	 KATHERINE MIRANDA PEÑA Representante a la Cámara Ponente
 DAVID RICARDO RACERO MAYORCA Representante a la Cámara Ponente	 VÍCTOR MANUEL ORTIZ JOYA Representante a la Cámara Ponente
 BAYARDO GILBERTO BETANCOURT PÉREZ Representante a la Cámara Ponente	 WADITH ALBERTO MANZUR IMBETT Representante a la Cámara Ponente

**CÁMARA DE REPRESENTANTES - COMISIÓN TERCERA
CONSTITUCIONAL PERMANENTE
(ASUNTOS ECONÓMICOS)**

Bogotá D.C., 21 de octubre de 2021. En la fecha se recibió en esta Secretaría el Informe de Ponencia **positiva** para Primer Debate del Proyecto de Ley N.º 152 de 2021 Cámara, **"POR MEDIO DEL CUAL SE DICTAN DISPOSICIONES PARA INCENTIVAR ALIVIOS PARA EMPRESAS Y CONTRIBUIR A LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA"**, suscrita por los Honorables Representantes a la Cámara, ARMANDO ANTONIO ZABARAÍN D'ARCE, CARLOS ALBERTO CARREÑO MARÍN, KATHERINE MIRANDA PEÑA, DAVID RICARDO RACERO MAYORCA, VÍCTOR MANUEL ORTÍZ JOYA, BAYARDO GILBERTO BETANCOURT PÉREZ, WADITH ALBERTO MANZUR IMBETT, CHRISTIAN JOSÉ MORENO VILLAMIZAR, y se remite a la secretaria general de la corporación para su respectiva publicación en la gaceta del congreso, tal y como lo ordena el artículo 156 de la ley 5ª de 1992.

La Secretaria General,


ELIZABETH MARTÍNEZ BARRERA

INFORME DE PONENCIA PARA PRIMER DEBATE AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 639 DE 2021 CÁMARA, 346 DE 2020 SENADO

por medio del cual se declara zona de interés ambiental, turístico y ecológico al Embalse del Guájaro en el Departamento del Atlántico, se reconoce su potencial pesquero y se dictan otras disposiciones.

<p>Bogotá 21 de octubre de 2021</p> <p>Doctor JAIR JOSÉ EBRATT DÍAZ Secretario Comisión Quinta Constitucional Permanente Cámara de Representantes Ciudad</p> <p>Referencia: Informe de ponencia para primer debate al Proyecto de Ley No. 639 de 2021 Cámara, 346 de 2020 Senado: "Por medio del cual se declara zona de interés ambiental, turístico y ecológico al Embalse del Guájaro en el Departamento del Atlántico, se reconoce su potencial pesquero y se dictan otras disposiciones"</p> <p>Respetado secretario:</p> <p>En cumplimiento de la designación realizada por la Mesa Directiva de la Comisión Quinta Constitucional de la Cámara de Representantes y de acuerdo con las disposiciones contenidas en la Ley 5ª de 1992, se rinde informe de ponencia para primer debate del Proyecto de Ley No. 639 de 2021 Cámara, 346 de 2020 Senado: "Por medio del cual se declara zona de interés ambiental, turístico y ecológico al Embalse del Guájaro en el Departamento del Atlántico, se reconoce su potencial pesquero y se dictan otras disposiciones".</p> <p>El Informe de Ponencia se rinde en los siguientes términos:</p> <p style="text-align: center;">INFORME DE PONENCIA PARA PRIMER DEBATE AL PROYECTO DE LEY NO. 639 DE 2021 CÁMARA, 346 DE 2020 SENADO:</p> <p style="text-align: center;">"POR MEDIO DEL CUAL SE DECLARA ZONA DE INTERÉS AMBIENTAL, TURÍSTICO Y ECOLÓGICO AL EMBALSE DEL GUÁJARO EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO, SE RECONOCE SU POTENCIAL PESQUERO Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES"</p>	<p>1. CONSIDERACIONES GENERALES</p> <p>1.1 Antecedentes del Proyecto</p> <p>El Proyecto de ley, "Por medio del cual se declara zona de interés ambiental, turístico y ecológico al embalse del Guájaro en el Departamento del Atlántico, se reconoce su potencial pesquero y se dictan otras disposiciones", fue radicado en la Secretaría General del Senado, el día 5 de noviembre del año 2020 por los Honorables Senadores MAURICIO GÓMEZ AMÍN, ARTURO CHAR CHALJUB, JOSE DAVID NAME CARDOZO, LUIS EDUARDO DIAZGRANADOS, EFRÁIN JOSÉ CEPEDA, MIGUEL AMÍN ESCAF, LAURA FORTICH SÁNCHEZ, ANTONIO ZABARAÍN, EDGAR PALACIO MIZRAHI, EDUARDO PULGAR DAZA, LAUREANO ACUÑA DÍAZ, ARMANDO BENEDETTI Y LOS HONORABLES REPRESENTANTES MARTHA PATRICIA VILLALBA, JOSÉ GABRIEL AMAR SEPULVEDA, KARINA ROJANO PALACIO, JEZMI BARRAZA ARRAUT, ARMANDO ZABARAÍN, CESÁR LORDUY MALDONADO Y MODESTO AGUILERA VIDES. Dicho proyecto con Radicado No. número 346 de 2020, fue remitido a la Comisión Quinta Constitucional Permanente del Senado, el día 10 de noviembre de 2020 y fue designado como ponente para Primer Debate Senado al Honorable Senador José David Name Cardozo quien presentó ponencia para primer debate la cual fue publicada en la gaceta 1335 de 2020 y debatida por la Comisión Quinta Constitucional Permanente del Senado de la República el día 7 de abril de 2021, así mismo, el 4 de mayo de 2021 el Honorable Senador José David Name Cardozo quien también fuere designado como ponente para segundo debate, presentó dicha ponencia la cual fue debatida y aprobada en plenaria del Senado el día 18 de junio de 2021.</p> <p>Posteriormente, el Proyecto de Ley No. 639 de 2021 Cámara, 346 de 2020 Senado: "Por medio del cual se declara zona de interés ambiental, turístico y ecológico al embalse del Guájaro en el Departamento del Atlántico, se reconoce su potencial pesquero y se dictan otras disposiciones" fue radicado en la secretaria general de la Cámara de Representantes el día 30 de junio de 2021 por los Honorables Senadores MAURICIO GÓMEZ AMÍN, ARTURO CHAR CHALJUB, LUIS EDUARDO DIAZGRANADOS TORRES, EFRÁIN JOSÉ CEPEDA SARABIA, MIGUEL AMÍN ESCAF, LAURA ESTHER FORTICH SANCHEZ, ANTONIO LUIS ZABARAÍN GUEVARA, EDGAR ENRIQUE PALACIO MIZRAHI, EDUARDO ENRIQUE PULGAR DAZA, LAUREANO AGUSTO ACUÑA DÍAZ, remitido a la Comisión Quinta Constitucional permanente Cámara el día 27 de julio de 2021 y designados como; ponente coordinador el Honorable Representante Alonso José Del Río Cabarcas y como ponentes la</p>
---	--

Honorable Representante Karen Violette Cure Corcione y el Honorable Representante Franklin Del Cristo Lozano De La Ossa.

1.2 Objeto del Proyecto

Esta iniciativa legislativa busca declarar al Embalse del Guájaro, ubicado entre los municipios de Sabanalarga, Repelón, Manatí y Luruaco en el departamento del Atlántico, como una zona de interés ambiental, turístico y ecológico y así poder promover su recuperación ambiental, implementar una estrategia turística y resaltar y fortalecer su vocación y actividad pesquera la cual es de vital importancia para la seguridad alimentaria de los habitantes de la zona.

1.3. Ubicación y descripción del Embalse

El embalse del Guájaro se encuentra a unos 50 kilómetros al suroeste de Barranquilla, en jurisdicción de los municipios de Repelón, Luruaco, Manatí y Sabanalarga. El espejo de agua se formó al construirse un terraplén de 15 kilómetros de longitud en los cauces de pequeñas ciénagas, el cual está constituido de un revestimiento de taludes compuesto por bloques de cemento. El embalse del Guájaro presenta una superficie de 160 kilómetros cuadrados, una capacidad de almacenamiento de 400 millones de metros cúbicos de agua y una capacidad de desagüe de 60 metros cúbicos por segundo con 4 compuertas reguladoras de la entrada y salida de agua, tiene una extensión aproximada de alrededor 16.000 hectáreas., no obstante, debido al deterioro ambiental, y el impacto que ha tenido este sobre el embalse, se estima que su extensión se encuentre ahora entre las 9.000 hectáreas aproximadamente.

Es considerado uno de los espejos de agua más importantes del departamento, puesto que determina la seguridad alimentaria de varios los municipios que limitan con el mismo, el embalse representa una oportunidad importante para la actividad económica de la región y el desarrollo de la actividad pesquera, así mismo, es importante resaltar el compromiso a nivel ambiental que repercute por el manejo del embalse y se debe priorizar y fortalecer su sostenibilidad y el bienestar de la flora y fauna que lo habitan ya que debido a los fenómenos ambientales que lo han afectado en los últimos años se han generado periodos de sequía que imposibilitan el uso del embalse y su aprovechamiento para la actividad económica, así mismo en las temporadas de lluvias se han generado inundaciones que igualmente impiden su uso.

El presente proyecto de ley busca fortalecer y potencializar el desarrollo ecoturístico, ambiental, ecológico y pesquero del embalse, permitiendo que se les brinde una mayor financiación a los planes, programas y/o proyectos direccionados al cumplimiento de estos propósitos.

2. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

Teniendo en cuenta la importancia turística, ecológica, ambiental y pesquera que tiene el Embalse del Guájaro para el Departamento del Atlántico y sobre todo para la zona de influencia del Embalse, resulta urgente reconocer este potencial e iniciar acciones que puedan garantizar un efectivo y sostenible desarrollo turístico, pesquero, ambiental y ecológico, y es en este sentido que se propone la siguiente iniciativa legislativa, mediante la cual se pretende declarar el Embalse del Guájaro zona de interés turístico, ambiental y ecológico, buscando así generar una mayor financiación y apropiación de recursos por parte del Gobierno Nacional y las entidades territoriales competentes, promoviendo mecanismos de cofinanciación y destinación de recursos presupuestales que vinculen las estrategias del gobierno nacional y departamental en pro del beneficio del Embalse y los habitantes de la zona de influencia del mismo.

2.1 Componentes temáticos del proyecto de ley

➤ **Eje ambiental y ecológico**

A pesar de ser un embalse artificial, el Embalse del Guájaro compromete una gran responsabilidad ecológica y ambiental dentro del departamento del Atlántico, siendo uno de los cuerpos de agua más importantes de la región. Dentro del mismo "discurren sus aguas de las subcuencas hidrográficas (La Peña, Cabildo, Salado, El Chorro, Aguas Blancas, Cascabel, Machacón, Cabeza de León, Lugo, Porquera, Antón, Triviño, Pitarro, Mazorca, La Montaña, El Pueblo, Estancia Vieja, Iracá, Guayacán, Limón, Platillal, Henequen, Picapica, Bartolo, Tabla, Brazo derecho y Banco)."¹

Teniendo en cuenta el valor ecosistémico del embalse, y su importancia biológica, ecológica, alimentaria y demás, es importante resaltar y analizar qué tipo de afectación ha sufrido esta zona por los distintos fenómenos ambientales que han sucedido en la región. Uno de los aspectos más preocupantes que se identifica en el embalse, es la contaminación que ha sufrido en las últimas décadas, no solo por el exceso del aprovechamiento de sus recursos, sino también por la carga y el manejo de "las aguas residuales, agroindustriales y de escorrentía superficial de los terrenos agrícolas que son vertidas sin ningún tipo de tratamiento".²

¹ García, C. Gutierrez, L. De la Parra, A. (2016). EL EMBALSE DE EL GUÁJARO: DIAGNOSTICO AMBIENTAL Y ESTRATEGIAS DE REHABILITACIÓN. Libro Sur del Atlántico Una Nueva Oportunidad (pp.32) Capítulo: 5 Edición: Manuel Alvarado. Colombia.
² Ibidem

Este proceso ha llevado a que, con los años, el cuerpo de agua y su diversidad biótica hayan sufrido una afectación importante, limitando así, la actividad económica que se desarrollaba en la zona y la utilización de carácter turístico y recreativo que se le podía contemplar al embalse. De igual manera, se considera que dentro de las mayores afectaciones que tiene el embalse actualmente se debe a los intensos periodos de sequía producto de prolongados acontecimientos ambientales como lo son principalmente el Fenómeno de El Niño.

Otro de los procesos que afectan ambientalmente la zona del Guájaro son las quemas sistemáticas que se identifican en las zonas aledañas al cuerpo de agua, debido a los periodos de sequía que han disminuido la extensión de la laguna, permitiendo que se establezcan nuevos cultivos. No obstante, es importante resaltar el valor y responsabilidad ambiental que han asumido los habitantes de la zona con respecto al embalse, en especial aquellos en donde su actividad pesquera se ha visto limitada por las afectaciones ambientales que este ha sufrido, es importante resaltar que la actividad pesquera no ha tenido un impacto ambiental grande sobre el embalse, puesto que esta problemática se reconoce primordialmente por los fenómenos de sequías y el manejo de aguas residuales.

De acuerdo con información recopilada por diarios locales y la Corporación Autónoma Regional de la zona, "(...)por el impacto de El Niño, el embalse está perdiendo 750.000 metros cúbicos diarios de agua que se evapora, lo que equivale a 300 piscinas olímpicas con medidas estándar."⁶ Por lo tanto, es importante que a través de este tipo de iniciativas se apoyen las medidas de las autoridades ambientales de la zona, en la generación de recursos que busquen la recuperación ambiental y eco sistémica del embalse, y así lograr su reactivación económica, turística y pesquera.

➤ **Eje turístico.**

En el país existen varios ejemplos de embalses con una vocación turística, complementado de forma integral con la conservación de los recursos naturales y las oportunidades de trabajo, pesca y agricultura de los habitantes de la zona. El embalse del Guájaro cuenta con todo el potencial y los recursos para adelantar iniciativas turísticas que generen desarrollo económico a la región, de la mano

de una cultura sostenible, y una aplicación adecuada de la capacidad de carga³ en el ecosistema del embalse.

Para visibilizar el potencial que se podría alcanzar con la presente iniciativa legislativa en el embalse del Guájaro se relacionan a continuación dos casos de éxito de desarrollo turístico integral, casos de éxito que han logrado conjugar actividades turísticas que generan progreso y avance de los municipios y sus habitantes, con la protección y conservación de los recursos naturales.

• **Embalse De Topocoro (Santander)**

A dos horas de la capital de Santander se encuentra el embalse del Topocoro, un espejo de agua que abarca 7.000 hectáreas en seis municipios del departamento, en el cual se realizan actividades económicas, deportivas y recreativas, existe una clara delimitación de zonas protegidas y explotación piscícola. En atención a la existencia de 25 embarcaderos públicos, el Ministerio de Transporte instalo una inspección fluvial para la vigilancia del uso del embalse.

Existe una gran oferta de actividades para turistas nacionales y extranjeros como el avistamiento de aves, senderismo y turismo ecológico. Así mismo se habilitó el 53.7% del área del embalse para que los habitantes de los municipios realicen proyectos de piscicultura artesanal y de subsistencia, es importante resaltar que la zona cuenta con más de 40 especies de peces y se realiza pesca artesanal de muchas de ellas⁴.

• **Embalse Guatapé (Antioquia)**

Ubicado a 62 km al oriente de Medellín, tiene una extensión de aproximadamente 2.262 hectáreas, su proyección como destino turístico ha hecho que el municipio de Guatapé sostenga su economía hasta en un 60% a razón del turismo. Ha realizado inversiones en infraestructura hotelera, los restaurantes, las lanchas y barcos, para el desarrollo de una fuerte economía turística. En los años 90, existían tan solo 3 o 4 hoteles y para el año 2017

³ Es el número máximo de personas para el aprovechamiento turístico que una zona puede soportar, asegurando unamáxima satisfacción a los visitantes y una mínima repercusión sobre los recursos naturales y culturales.

⁴ Portal las 2 Orillas. Topocoro: el gran embalse vuelto destino turístico. Véase en: <https://www.las2orillas.co/topocoro-el-gran-embalse-vuelto-destino-turistico/>

el municipio ya contaba con más 40 hoteles y 15 hostales⁵.

El Malecón de Guatapé ha desarrollado una gran oferta gastronómica, con una gran variedad de restaurantes con oferta de platos típicos. Se realizan festivales náuticos, torneos nacionales de kayak y se practica la pesca deportiva. Lugares adecuados para la práctica de deportes extremos y alquiler de Veleros, Kayak, motos acuáticas y Esqui acuático. Otras actividades son el ciclomontañismo, Cabalgatas, caminatas por senderos, camping, piscinas naturales, zonas de pesca, entre otros.

Según cifras de la Secretaría de Turismo municipal en el año 2018, *“en semana reciben diariamente cerca de 1.000 visitantes, mientras que los fines de semana pueden llegar hasta 3.500, una cifra que se incrementa si es puente festivo, cuando han llegado hasta 7.000 personas, poco más que la población de Guatapé 6.970 habitantes”*⁶

El embalse del Guájaro requiere actualmente una importante intervención para salvaguardar sus recursos naturales, restituir zonas protegidas, adecuado manejo de aguas y residuos, apoyo a las cooperativas de pescadores para garantizar la seguridad alimentaria de la zona, entre muchas otras necesidades que deben ser atendidas por el gobierno nacional y los entes territoriales. Atender los anteriores requerimientos permitirá visibilizar las oportunidades y recursos con los que cuenta el embalse para promover un desarrollo turístico sostenible, que brinde generación de empleo, crecimiento económico y desarrollo de emprendimientos a los municipios de Sabanalarga, Repelón, Manatí y Luruaco en el departamento del Atlántico.

➤ **Eje de actividad pesquera**

El embalse Guájaro que se encuentra entre los municipios de Repelón, Manatí, Luruaco y Sabanalarga en el Atlántico cuyo departamento mostró una producción piscícola estimada de

⁵ Portal El Mundo. Guatapé fortalece en turismo seguro y de alto nivel. Véase en: <https://www.elmundo.com/noticia/Guatape-se-fortalece-en-turismo-seguro-y-de-alto-nivel/355012>

⁶ Periódico El Tiempo. Hundimiento de ‘El Almirante’ no ahogó el turismo en Guatapé. Véase en: <https://www.eltiempo.com/colombia/medellin/asi-va-el-turismo-en-guatape-un-ano-despues-del-hundimiento-de-el-almirante-235436>

1.700 toneladas en 2018 y 2.252 toneladas en el primer semestre 2019 con crecimiento un de 32% al primer semestre del 2019⁷, se considera con gran potencial pesquero debido a su gran extensión de 16.000 hectáreas puesto que la pesca es el producto principal que brinda el Embalse Del Guájaro que es el cuerpo de agua más grande del departamento⁸. Cabe resaltar que la producción piscícola estimada total del país fue 129.410 toneladas en 2018 y 79.526 toneladas para el primer semestre del 2019 nominalmente representando un 0.19% del PIB de Colombia.⁹ Dicho proceso de fortalecimiento de la actividad pesquera igualmente promover una seguridad alimentaria en la zona, que le permita a los habitantes recurrir a esta actividad productiva y proveerse de la misma.

La pesca se encuentra como fuente para la inclusión social al ser una herramienta para la generación de empleo. Pero dentro de las aguas del departamento no hay un proceso tecnológico que genere valor agregado al producto de la pesca sino que su mayoría se destina al consumo fresco y comercialización, además dentro del embalse todavía se maneja un sistema de artesanal lo cual podría reflejar un sistema productivo no óptimo y poco rentable, teniendo en cuenta las 16.000 ha con las que cuenta el embalse, por lo tanto se busca la evolución de estos procesos para el mejoramiento agroindustrial. ¹⁰ De este modo, según la Secretaría Técnica Cadena Nacional Acuicultura Del 2009 al 2018 la generación de empleo del sector acuicultura mostró un incremento promedio anual del 5%¹¹, y se quiere mejorar este resultado.

Una investigación realizada por la División de Investigaciones Pesqueras, el Centro de Investigaciones Pesqueras y la INDERENA (Instituto Nacional De Los Recursos Naturales Renovables Y Del Medio Ambiente – *Institución Actualmente No Existente*) titulado:

⁷ Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Datos y estadísticas. Véase en: <https://sioc.minagricultura.gov.co/Acuicultura/Documentos/2019-09-30%20Cifras%20Sectoriales.pdf#search=pesca>

⁸ Plan de Desarrollo, Departamento del Atlántico. 2020-2023. Atlántico para la gente. Colombia. Véase en: <https://sioc.minagricultura.gov.co/Acuicultura/Documentos/2019-09-30%20Cifras%20Sectoriales.pdf#search=pesca>

⁹ Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Datos y estadísticas. Véase en: <https://sioc.minagricultura.gov.co/Acuicultura/Documentos/2019-09-30%20Cifras%20Sectoriales.pdf#search=pesca>

¹⁰ Plan de Desarrollo, Departamento del Atlántico. 2020-2023. Atlántico para la gente. Colombia.

¹¹ Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Datos y estadísticas. Véase en: <https://sioc.minagricultura.gov.co/Acuicultura/Documentos/2019-09-30%20Cifras%20Sectoriales.pdf#search=pesca>

“Evaluación De Las Pesquerías Del Embalse De El Guájaro, Colombia” que se presentó en el trabajo *“Trabajos presentados al Segundo Taller Internacional sobre Ecología y Manejo de Peces en Lagos y Embalses”* (1987) reconoce el potencial pesquero del embalse concluyendo que:¹²

- Con una captura total anual de 1.311 toneladas, la pesca en el embalse representó un rendimiento de 82 kg/ha/año. Se encontró un número de pescadores que fluctuó entre 4,4 y 6,2 pescadores por km², y se determinó un esfuerzo diario promedio de 232 canoas de pesca. Se aplicaron diferentes modelos productivos, encontrándose rendimientos potenciales que fluctuaron entre 95–233 kg/ha/año, lo cual permitió plantear un posible incremento del rendimiento actual; para ello se presentan comparaciones con las pesquerías de las planicies inundables de la cuenca del río Magdalena.
- El embalse de El Guájaro presenta más altos rendimientos por unidad de esfuerzo que las planicies inundables de la cuenca Magdalena en general, y la zona del Canal del Dique en particular, aun cuando la densidad del esfuerzo es similar en términos de canoas de pesca por unidad de superficie.
- Con el fin de alcanzar un óptimo manejo de las pesquerías del embalse, se requiere a corto plazo superar los vacíos de información, unido a un monitoreo constante de las capturas, y de su composición y rendimiento.

Dentro de las 33 actividades de agricultura que se encuentran en el plan de desarrollo del departamento para la vigencia 2020-2023 “Atlántico para la Gente”, la pesca fue priorizada al tener un 4,5% de participación dentro de las actividades, la cual también cuenta con sub actividades como pesca deportiva y pesca submarina para el mejoramiento del sector turístico, impactando positivamente los ingresos de la región, todo esto teniendo en cuenta que los cuerpos de agua del Atlántico representan un 6,8% de la superficie del departamento siendo el Embalse del Guájaro una principal fuente de agua.¹³

Para el embalse del Guájaro se han realizado capacitaciones, suministro de 20 atarayas, y

¹² Trabajos presentados al Segundo Taller Internacional sobre Ecología y Manejo de Peces en Lagos y Embalses. COPESCAL Technical Paper. No. 9 (Es). <http://www.fao.org/inland-fisheries/tools/detail/es/c/1149752/>

¹³ Plan de Desarrollo, Departamento del Atlántico. 2020-2023. Atlántico para la gente. Colombia.

la reparación de 132 canoas beneficiando a 135 pescadores por un valor de \$556 millones de pesos inversión con el fin de mejorar la convivencia ciudadana y las condiciones de los pescadores de las poblaciones aledañas al embalse del Guájaro, también se realizó la Siembra de 2'000.000 alevinos de bocachico, A través de la CRA (Corporación Autónoma Regional del Atlántico) con objetivo de activar la pesca artesanal.¹⁴ En este año se han venido realizando proyectos de mejoramiento en producción para la pesca en el departamento con el *“Plan Pesca”* donde el embalse del Guájaro cuenta con 10 millones de alevinos de lebranche, róbal y lisas,¹⁵ con el fin de promover la seguridad alimentaria de los habitantes de la región.

Por otra parte, resultados del estudio realizado en 2013 por el DPS (Departamento de la Prosperidad Social), sobre el Análisis de Vulnerabilidad alimentaria y nutricional se identificó que las áreas agrícolas inundables, tienen mayor riesgo para la disponibilidad de alimentos, donde se consideró que el canal del Dique y en zona del embalse del Guájaro (Manatí, Repelón y Luruaco) se encontraban en riesgo medio (Plan de Desarrollo 2020 – 2023).

Se consignó en dicho documento lo siguiente:

*“Plan Pesca” también se busca garantizar la seguridad alimentaria de las poblaciones aledañas al Embalse del Guájaro que se derivan del sustento de la pesca y su comercialización.*¹⁶

Es importante resaltar el esfuerzo mancomunado que se encuentra realizando la actual administración del departamento del Atlántico con respecto a la recuperación, desarrollo y productividad del Embalse del Guájaro. De acuerdo a lo expuesto en su plan de desarrollo, se logra identificar la intencionalidad que tiene el departamento para la recuperación y mantenimiento de los cuerpos de

¹⁴ Informe De Empalme 2016 – 2020. Gobernación del Departamento del Atlántico.

¹⁵ Con el Plan Pesca dinamizaremos la economía de los municipios del Atlántico: Elsa Noguera. Véase en: <https://www.atlantico.gov.co/index.php/noticias-desarrollo/13942-con-el-plan-pescao>

¹⁶ Sabanalarga una de las grandes beneficiadas con el ‘Plan Pesca’ Véase en: <http://www.sabalarga-atlantico.gov.co/noticias/sabalarga-una-de-las-grandes-beneficiadas-con-el-plan>

agua que brindan oportunidad para la pesca y a su vez para la el turismo de la región. Otro punto importante para resaltar, es la evaluación del impacto ambiental sobre el embalse que ha logrado visualizar la administración del departamento, en donde buscan mitigarlo mediante la dotación de infraestructura de alcantarillado sanitario y sistemas de tratamientos de aguas residuales que "Para el caso específico del Embalse del Guájaro se trabajará en los corregimientos de La Peña y Aguada de Pablo del municipio de Sabanalarga y en los corregimientos de Rotinet y Villa Rosa del municipio de Repelón, obras que aportarán a la recuperación de este cuerpo de agua." ¹⁷ Resaltando la importancia ejecutar una recuperación ambiental del embalse de la mano de actividades productivas sostenibles que permitan su aprovechamiento turístico, ecológico y económico.

Finalmente es importante mencionar que este proyecto de ley está en concordancia con los objetivos del sector de acuicultura y pesca en el departamento según el plan de desarrollo y también con los objetivos del sector en Colombia que son los siguientes:¹⁸

- Mejora de la productividad y la competitividad.
- Diversificación de la acuicultura con nuevas especies.
- Modernización de los sistemas de producción.
- Formalización de los acuicultores y fortalecimiento gremial y/o asociativo.
- Desarrollo de la acuicultura en cuerpos de agua natural y artificial (embalses, lagos y lagunas).
- Desarrollo de la agenda de investigación en acuicultura.
- Articulación interinstitucional para la implementación de buenas prácticas- BPPA.
- Sostenibilidad ambiental y desarrollo social.
- Ampliar oferta de crédito y financiamiento.
- Estructuración del Proyecto de Ley del Fondo Nacional de la Piscicultura para su fomento.
- Empleo: Aumentó del 8% en generación de empleos directos en la acuicultura.

¹⁷ Plan de Desarrollo, Departamento del Atlántico. 2020-2023. Atlántico para la gente. Colombia.

¹⁸ Con el Plan Pescazo dinamizaremos la economía de los municipios del Atlántico": Elsa Noguera. Véase en: <https://www.atlantico.gov.co/index.php/noticias-desarrollo/13942-con-el-plan-pescazo>

2.2 Socialización del Proyecto de Ley

El presente proyecto de ley busca la socialización de distintos actores sectoriales y gubernamentales que apoyen la discusión y construcción de la presente iniciativa. El día 13 de noviembre del año 2020, se adelantó, en el curso del trámite legislativo del proyecto de Ley 346 de 2020 en Senado, la primera mesa de trabajo técnica con los Ministerios que se relacionan en el articulado del presente proyecto de ley. En primer lugar, se adelantó reunión con la Dirección de Calidad y Desarrollo Sostenible del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, a su vez con técnicos encargados de la Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Eco sistémicos, igualmente con la Coordinación pesquera y acuícola del Ministerio de Agricultura.

Durante el proceso de estudio del Proyecto de Ley No. 639 de 2021 Cámara, 346 de 2020 Senado: socializamos con las Entidades competentes, esto es, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Ministerio de Hacienda y Autoridad

Nacional de Acuicultura y Pesca, quienes conceptuaron al respecto y sugirieron una serie de recomendaciones y sugerencias las cuales fueron estudiadas y consideradas por los ponentes.

3. FUNDAMENTO JURÍDICO

El Congreso de la República en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial, las conferidas en el artículo 150 de la Constitución Política de Colombia, busca establecer por medio de esta Ley proteger y fomentar el desarrollo social y económico y cultural del embalse del Guájaro, declarándola zona de interés turístico y ecológico; concomitante esto con la ley 300 de 1996 por la cual se expide la ley general de turismo la cual en su artículo primero modificado por el art. 2, Ley 1558 de 2012¹⁹, destaca la importancia de la industria turística, Indicándonos categóricamente que el turismo es una industria

¹⁹ Por la cual se modifica la Ley 300 de 1996 -Ley General de Turismo, la Ley 1101 de 2006 y se dictan otras disposiciones

esencial para el desarrollo del país y en especial de las diferentes entidades territoriales, regiones, provincias y que cumple una función social y por tal razón el Estado le dará especial protección en razón de su importancia para el desarrollo nacional.

Por otra parte, en coordinación interinstitucional en materia agraria se destaca la importancia de la acuicultura en esta zona, la cual se ha desarrollado principalmente a nivel rural y como complemento a las actividades de la agricultura. La Ley N° 13 de 1990 Estatuto General de Pesca y su Decreto reglamentario N° 2256 de 1991, constituyen el principal marco normativo de mencionada actividad en nuestro país bajo la autoridad central del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR) para la administración y manejo de las pesquerías, como lo confirma el Decreto N° 1985 de 2013, art. 1, inciso segundo. Dicha administración está en cabeza de La Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca – AUNAP²⁰ que fue creada mediante decreto 4181 del 3 de noviembre de 2011 por mencionado ministerio, y el cual su principal objetivo misional es el aprovechamiento eficiente y sostenible de los recursos pesqueros y el desarrollo de la acuicultura en el territorio nacional, con el propósito de contribuir a la seguridad alimentaria y nutricional del país, así como a su desarrollo económico y social, afin esto con el objetivo principal del presente proyecto de ley.

También integrado a este proyecto de ley y concerniente directamente al tema ambiental y turístico encontramos en el decreto único reglamentario del sector ambiente y desarrollo sostenible 1076 de 2015 el cual compila y modifica varios artículos del decreto 1541 DE 1978. Con relación al tema que nos ocupa el presente proyecto de ley, el decreto nos indica en su Artículo 2.2.3.2.12.2. **Servicios de turismo, recreación o deporte**, que el establecimiento de servicios de turismo, recreación o deporte en corrientes, lagos y **demás depósitos de aguas del dominio público** requieren concesión ²¹ o asociación en los términos que establezca la autoridad ambiental competente. Así las cosas, se logra la participación integral

²⁰ Funciones de la AUNAP (de acuerdo con el decreto 4181 de 2011) <https://www.aunap.gov.co/index.php/aunap/funciones>

²¹ La concesión se registrará por las normas previstas en las secciones 7, 8 y 9 del título 3 correspondiente a aguas marítimas capítulo 1-INSTRUMENTOS PARA LA PLANIFICACIÓN, ORDENACIÓN Y MANEJO DE LAS CUENCAS HIDROGRÁFICAS Y ACUÍFEROS. De la ley 1076 de 2015 y la asociación se registrará por la legislación vigente sobre la materia.

de las autoridades que desarrollan este tema y tiene pleno conocimiento acerca del mismo, pertenecientes a los municipios colindantes con mencionado embalse.

Así pues, también encontramos que conforme a lo establecido en el Decreto 229 de 2017²², mencionada zona, automáticamente deberán inscribirse en el Registro Nacional de Turismo, de igual manera los prestadores de servicios turísticos enumerados en el artículo 2.2.4.1.1.12 y así de esta manera de forma inmediata poder acceder a incentivos establecidos en la ley 1101 DE 2006 por la cual se modifica la Ley 300 de 1996 -Ley General de Turismo y se dictan otras disposiciones la cual indica:

"Artículo 16. Incentivos tributarios. Únicamente los prestadores de servicios turísticos debidamente inscritos en el Registro Nacional de Turismo podrán ser beneficiarios de los incentivos tributarios y fiscales consagrados a su favor en disposiciones de orden nacional, departamental, distrital o municipal y que tenga por fin estimular, apoyar o promover la actividad turística. La omisión de la actualización del Registro Nacional de Turismo, así como el incumplimiento en el pago de la contribución parafiscal, suspenderá el incentivo tributario correspondiente al año fiscal en el cual se presente la omisión o incumplimiento".

De igual forma con los beneficios establecidos por el Decreto 2131 de 1991²³ en todo lo concerniente a lo que se entiende por turismo receptivo, el cual es el ingreso de turistas extranjeros y de nacionales residentes en el exterior a esta zona y que estos también puedan poseer o negociar toda clase de divisas, para el pago de los servicios turísticos allí utilizados.

3.1 Autorización para acceder a recursos del PGN

Para concebir la presente iniciativa se tuvo en cuenta los elementos que normalmente generan las objeciones presidenciales en relación a ordenar gasto público. La facultad del Congreso de la

²² Por el cual se establecen las condiciones y requisitos para la inscripción Registro Nacional de Turismo y se modifican en su integridad las secciones 1,2 y 3 del capítulo 1 del título 4 de la parte 2 del libro 2 del Decreto 1074 de 2015, Reglamentario del sector Comercio, Industria y Turismo

²³ Ley 1101 de 2006. Por la cual se modifica la Ley 300 de 1996 - Ley General de Turismo y se dictan otras disposiciones. Diario Oficial No. 46.461 de 23 de noviembre de 2006

<p>República para autorizar gastos está más que sustentada y se describe con claridad el articulado pertinente sobre los principios en materia de distribución de competencias²⁴ y el principio de coordinación, concurrencia y subsidiariedad (artículo 288); principio de legalidad en el gasto público (artículo 345) y, en general, su "conformidad con los requisitos del Estatuto Orgánico del Presupuesto (Leyes 38/89, 179/94 y 225/95, compiladas por el Decreto Presidencial 111 de 1996); su identidad con el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022²⁵ en cuanto a inversiones que contribuyan al logro de mayor competitividad, productividad e impacto social de las regiones". <u>No hay duda que la autorización dada al Gobierno nacional debe ser consecuentes con el Plan Nacional de Desarrollo y el Presupuesto General de la Nación.</u></p> <p>Así lo señala el artículo 346 de la Carta, desarrollado por el artículo 39 del Estatuto Orgánico del Presupuesto -Decreto 111 de 1996, por tanto, así, se han estructurado en esta iniciativa los artículos que autorizan la destinación de presupuesto.</p> <p>La Corte constitucional lo ha reiterado así:</p> <p style="padding-left: 40px;">"... en materia de gasto público, la competencia parlamentaria desarrolla el principio superior de legalidad del gasto público, según el cual corresponde al Congreso, en su condición de órgano de representación popular, ordenar las erogaciones necesarias para ejecutar los compromisos inherentes al Estado Social de Derecho (artículos 150 y 347 Constitución Política). Sin embargo, el legislador primario por vía de excepción, reservó para el Ejecutivo la iniciativa legislativa en relación con algunos aspectos (artículo 154</p> <p>²⁴ Esto significa que, en materia de gasto público, la Carta Política efectuó un reparto de competencias entre el Congreso y el Gobierno Nacional, de tal manera que ambos tienen iniciativa del gasto de conformidad con los preceptos constitucionales, y deben actuar coordinadamente dentro de sus competencias.</p> <p>²⁵ Así, el Gobierno requiere de la aprobación de sus proyectos por parte del Congreso y el Congreso requiere de la anuencia del Gobierno, quien determinará la incorporación de los gastos decretados por el Congreso, siempre y cuando sean consecuentes con el Plan Nacional de Desarrollo y el Presupuesto General de la Nación, tal como lo estipula el artículo 346 de la Carta. (...)</p>	<p style="text-align: right;">Constitución Política).²⁶</p> <p>Esto significa que, en materia de gasto público, la Carta Política efectuó un reparto de competencias entre el Congreso y el Gobierno Nacional, de tal manera que ambos tienen iniciativa del gasto de conformidad con los preceptos constitucionales, y deben actuar coordinadamente dentro de sus competencias. Así, el Gobierno requiere de la aprobación de sus proyectos por parte del Congreso y el Congreso requiere de la anuencia del Gobierno, quien determinará la incorporación de los gastos decretados por el Congreso, siempre y cuando sean consecuentes con el Plan Nacional de Desarrollo y el Presupuesto General de la Nación.²⁷</p> <p>De manera que podemos concluir, que, de conformidad con el texto constitucional y los planteamientos de la Corte Constitucional, este proyecto de ley que decreta gasto público, se ajusta al ordenamiento constitucional, <u>por cuanto se limita a habilitar al Gobierno para incluir estos gastos en el proyecto de presupuesto.</u> Desde este argumento, debe analizarse y aprobarse la inversión señalada en los artículos 2º, 3º y 4º del proyecto de ley ya que se ajustan a los criterios anteriormente expuestos.</p> <p>3.2 Competencias orgánicas entre la nación y los entes territoriales.</p> <p>En relación con los artículos que establecen las autorizaciones pertinentes sobre recursos, no se evidencia ninguna incompatibilidad en relación a la distribución de competencias y recursos entre la Nación y los entes territoriales. En efecto, la Ley 715 de 2001, ley orgánica que distribuye las competencias entre la Nación y las entidades territoriales de conformidad con los artículos 151 y 288 de la Constitución Política, asigna los recursos de que tratan los artículos 356 y 357 de la Constitución Política y señala los servicios que corresponde cumplir a los municipios, a los departamentos y a la Nación. Las disposiciones de esta ley, son el referente normativo que ha de tenerse en cuenta para verificar que los compromisos futuros sobre ejecución de proyectos de inversión en el embalse del Guájaro, como la señalada en los</p> <p>²⁶ Corte Constitucional, Sentencia C-859 de 2001, C- 766 de 2010</p> <p>²⁷ Ibidem</p>
<p>artículos aludidos resultan conforme a la Constitución.</p> <p>3.3 Impacto fiscal: artículo 7º de la ley 819 de 2003.</p> <p>El mencionado artículo 7º de la Ley 819 de 2003, ha dicho la Corte Constitucional, se erige como una importante herramienta tanto para racionalizar el proceso legislativo como para promover la aplicación y el cumplimiento de las leyes, así como la implementación efectiva de las políticas públicas, de manera que se debe establecer el costo y la fuente presupuestal que respaldará la iniciativa. Sin embargo, como están concebidos los artículos 2, 3 y 4, y la fórmula del párrafo 2º del artículo 5º, el proyecto no está generando ningún impacto fiscal en el inmediato plazo porque las autorizaciones otorgadas al Gobierno nacional en virtud de la futura ley, <u>se incorporarán, en primer lugar, reasignando los recursos hoy existentes en cada órgano ejecutor, sin que ello implique un aumento del presupuesto. En segundo lugar, de acuerdo con las disponibilidades que se produzcan en cada vigencia fiscal. Además, el proyecto se limita a autorizar al Gobierno para incluir estos gastos en el proyecto de presupuesto.</u></p> <p>4. CONTENIDO DEL PROYECTO DE LEY</p> <p>El presente proyecto de ley cuenta con seis artículos, incluida la vigencia. En el primer artículo se señala la declaratoria de interés ambiental, turístico y ecológico al Embalse del Guájaro. En su artículo segundo, se establecen los lineamientos promovidos desde el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para promover el interés ambiental y ecológico de la propuesta del proyecto de ley. En su artículo tercero, se incluye el eje turístico de la iniciativa, por parte del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. En el artículo cuarto se introduce la participación del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural para promover la actividad pesquera de la iniciativa. En el artículo quinto, se define la financiación de la iniciativa, frente a los lineamientos de presupuesto y cofinanciación. Finalmente, en el artículo sexto se encuentra la vigencia.</p> <p>5. CONSIDERACIONES DEL PONENTE</p> <p>Resaltamos la importancia de la presente iniciativa legislativa, el Proyecto de Ley No. 639 de 2021 Cámara, 346 de 2020 Senado, "Por medio del cual se declara zona de interés ambiental, turístico y ecológico al embalse del Guájaro en el Departamento del Atlántico, se reconoce su potencial pesquero</p>	<p>y se dictan otras disposiciones" tiene como pilar el reconocimiento del potencial turístico, ecológico y pesquero del Embalse del Guájaro, así como, resaltar la importancia de iniciar un proceso de recuperación y</p> <p>sostenimiento ambiental en el Embalse, todo ello, como un pilar para el desarrollo económico y la seguridad alimentaria de los habitantes de la zona y, en ese sentido, al analizar el contenido del proyecto de Ley, vimos necesario solicitar a diferentes Entidades competentes en la materia, concepto acerca del contenido del mismo, con el objetivo de socializar la iniciativa y aunar esfuerzos para el fortalecimiento del referido proyecto de Ley, es así que obtuvimos concepto positivo, aunque con algunas recomendaciones y sugerencias que estudiamos y acogimos, de las Entidades que se relacionan a continuación:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural conceptuó acerca del referido proyecto de Ley resaltando la importancia del Embalse del Guájaro es de gran importancia regional por su aporte al abastecimiento de agua a los distritos de riego de Repelón y Manatí que facilitan el desarrollo de actividades agropecuarias y genera soporte para gran cantidad de especies. ➤ El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo a su vez manifestó que considera favorable esta iniciativa ya que es propicia para el desarrollo turístico del Departamento del Atlántico y concuerda con la planificación turística que se dicta desde los instrumentos de política pública de turismo en Colombia. ➤ El Ministerio de Hacienda y Crédito Público realiza una serie de recomendaciones, las cuales se consideraron en la iniciativa legislativa desde su trámite en Senado y en esta ocasión consideramos apropiado que se continúe bajo estas premisas, y en este sentido el Ministerio manifiesta su disposición con esta iniciativa legislativa dentro de los parámetros constitucionales y legales de la disciplina fiscal vigente. ➤ La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales AUNAP, considera viable el presente proyecto de Ley y considera que se debe priorizar la recuperación del embalse y que todas las acciones que se emprendan en razón al desarrollo del mismo, deben ir encaminadas a la conservación de cuerpo de agua y las especies que allí habitan.

Además de lo enunciado, las recomendaciones y sugerencias hechas en los diferentes proyectos, luego de analizadas y dialogadas con las mismas Entidades, se vincularon al presente proyecto de Ley como se puede evidenciar en el pliego de modificaciones que relacionamos a continuación.

5.1 Pliego de Modificaciones

TEXTO RADICADO	ARTICULADO PROPUESTO PARA PRIMER DEBATE	JUSTIFICACIÓN
Título: "POR MEDIO DEL CUAL SE DECLARA ZONA DE INTERÉS AMBIENTAL, TURÍSTICO Y ECOLÓGICO AL EMBALSE DEL GUÁJARO EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO, SE RECONOCE SU POTENCIAL PESQUERO Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES"	"POR MEDIO DEL CUAL SE DECLARA ZONA DE INTERÉS AMBIENTAL, TURÍSTICO Y ECOLÓGICO <u>PESQUERO</u> AL EMBALSE DEL GUÁJARO EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO, SE RECONOCE SU POTENCIAL PESQUERO Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES"	Acogiendo lo conceptuado por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca- AUNAP, quienes sugieren incluir en la declaración "zona de interés pesquero" ya que se resalta la importancia de este sistema hídrico como despensa pesquera y acuícola por excelencia de la zona por lo cual es crucial reconocer y salvaguardar este recurso pesquero con el fin garantizar la seguridad alimentaria de la comunidad pesquera.
Artículo 1°. Declárese zona de interés ambiental, turístico y ecológico al Embalse del Guájaro ubicado entre los municipios de Sabanalarga, Repelón, Manatí y Luruaco en el departamento del Atlántico.	Artículo 1°. Declárese zona de interés ambiental, turístico, ecológico y <u>pesquero</u> al Embalse del Guájaro ubicado entre los municipios de Sabanalarga, Repelón,	Acogiendo lo conceptuado por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca- AUNAP, quienes sugieren incluir en la declaración "zona de interés

	Manatí y Luruaco en el departamento del Atlántico.	pesquero" ya que se resalta la importancia de este sistema hídrico como despensa pesquera y acuícola por excelencia de la zona por lo cual es crucial reconocer y salvaguardar este recurso pesquero con el fin garantizar la seguridad alimentaria de la comunidad pesquera.
Artículo 2°. De conformidad con lo anterior, autorícese al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para que incorpore dentro de sus proyectos de inversión, los recursos para la recuperación, protección y conservación del ecosistema con que cuenta el Embalse del Guájaro, así como la recuperación paisajística de su entorno. Dentro de los proyectos de inversión se incluirá la conservación de la flora, fauna y todas las especies de animales que habitan la zona, promoviendo el crecimiento adecuado y sostenible de la población acuífera.	Artículo 2°. De conformidad con lo anterior, se autorícese <u>Se autoriza</u> al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para que incorpore dentro de sus proyectos de inversión, los recursos para la <u>destine los recursos necesarios al desarrollo de programas, planes y/o proyectos de inversión, destinados a la</u> recuperación, protección y conservación del ecosistema con que cuenta el Embalse del Guájaro, así como la recuperación paisajística de su entorno. Dentro de los proyectos de inversión se incluirá, la conservación de la flora, fauna y todas las especies	Se realiza a consideración de los ponentes ajustes en la redacción de este artículo. Acogiendo el concepto de del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca- AUNAP, se elimina el concepto de "población acuífera" y se reemplaza por el de "poblaciones acuáticas, ribereñas y/o asociadas a cuerpos de agua", por ser más precisos desde la perspectiva técnica.

	de animales que habitan la zona, promoviendo el crecimiento adecuado y sostenible de la población acuífera <u>las poblaciones acuáticas, ribereñas y/o asociadas a cuerpos de agua.</u>	
Artículo 3°. Se autoriza al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo para que incluya dentro de sus programas de desarrollo e infraestructura de ecoturismo, agroturismo y acaturismo, los proyectos de inversión que permitan e incentiven el desarrollo en el Embalse del Guájaro ubicado en el departamento del Atlántico.	Artículo 3°. Se autoriza al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo para que incluya dentro de sus programas de desarrollo e infraestructura de ecoturismo, agroturismo y acaturismo, los proyectos de inversión que permitan e incentiven el desarrollo turístico y comercial sostenible del Embalse del Guájaro ubicado en el departamento del Atlántico, <u>así mismo, dentro del marco de sus competencias, incluir planes, programas y/o proyectos, que puedan aportar al fortalecimiento de los aspectos ambientales, ecológicos y pesqueros del embalse.</u>	Se realiza a consideración de los ponentes ajustes en la redacción de este artículo. Acogiendo el concepto de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca- AUNAP y a consideración de los ponentes, se amplía el margen de acciones que pudiere emprender el Ministerio de Comercio Industria y Turismo y que puedan aportar y fortalecer el desarrollo del embalse.
Artículo 4°. Autorícese al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural para que	Artículo 4°. Autorícese <u>Se autoriza</u> al Ministerio de Agricultura y Desarrollo	Se realiza a consideración de los ponentes ajustes en la redacción de este artículo.

incorpore dentro de sus proyectos de inversión en la zona un plan pesquero y acuícola sostenible que permita la organización de esta actividad productiva mantenimiento los recursos pecuarios de la misma. Como también la participación de las cooperativas de pescadores que operan en la zona.	Rural para que incorpore dentro de sus proyectos de inversión en la zona un plan pesquero y acuícola sostenible que <u>promueva y ejecute planes, programas y/o proyectos de inversión que desarrollen la actividad pesquera y acuícola de una manera sostenible, que a su vez</u> permita la organización de esta actividad productiva <u>garantizando el</u> mantenimiento de los recursos pecuarios <u>recursos pesqueros de la misma del embalse.</u> Como también la participación de las cooperativas de pescadores que operan en la zona. El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural garantizará en el proceso de concertación de los planes, programas y/o proyectos que benefician y desarrollen la actividad pesquera en el Embalse del Guájaro, la	Acogiendo el concepto de del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca- AUNAP se cambia el término "recursos pecuarios" por "recursos pesqueros" pues se entiende que es a estos a los que se refiere y se modifica la redacción del segundo inciso con el fin de aclarar la participación de las cooperativas de pescadores que operan en la zona.
--	---	---

<p>participación de la población pesquera que de manera individual u organizada en asociaciones y/o cooperativas realizan esta actividad en la zona de influencia del embalse del Guájaro.</p> <p>Artículo 5°. Para contribuir al fomento del desarrollo de los proyectos ambientales, turísticos, ecológicos y pesqueros dentro del Embalse del Guájaro, se autoriza al Gobierno Nacional en coordinación con el Departamento del Atlántico y los municipios de Sabanalarga, Repelón, Manatí y Luruaco para que de conformidad con sus funciones constitucionales y legales incorporen dentro sus presupuestos las apropiaciones y recursos necesarios para fomentar el desarrollo de proyectos turísticos, ecológicos y pesqueros dentro del Embalse del Guájaro.</p> <p>Parágrafo 1. A partir de la sanción de la presente ley y conforme a lo establecido en los artículos 288, 334, 341 y</p>	<p><u>Artículo 5°.</u> Para contribuir al fomento del desarrollo de los proyectos ambientales, turísticos, ecológicos y pesqueros dentro del Embalse del Guájaro, se autoriza al Gobierno Nacional en coordinación con el Departamento del Atlántico y los municipios de Sabanalarga, Repelón, Manatí y Luruaco para que de conformidad con sus funciones constitucionales y legales incorporen dentro sus presupuestos las apropiaciones y recursos necesarios para fomentar el desarrollo de proyectos turísticos, ecológicos y pesqueros dentro del Embalse del Guájaro.</p> <p><u>Parágrafo 1.</u> A partir de la sanción de la presente ley</p>	<p>Se traslada el artículo 5 como viene en ponencia de Senado para incluir un artículo nuevo, en este sentido el artículo 5 de ponencia de Senado pasa a ser el artículo 6 de ponencia de Cámara para primer debate.</p> <p>El artículo nuevo se incluye a consideración de los ponentes con el fin de promover el apoyo, asesoría y capacitación por parte de las Entidades competentes a la población y autoridades que promuevan y desarrollen programas ambientales, turísticos, ecológicos y pesqueros dentro de la zona de influencia del Embalse del Guájaro.</p>	<p>345 de la Constitución Política, las competencias establecidas en la Ley 715 de 2001 y sus decretos reglamentarios, Decreto número 111 de 1996 y la Ley 819 de 2003, el Gobierno nacional y los gobiernos territoriales quedan autorizados para impulsar a través del Sistema Nacional de Cofinanciación las apropiaciones necesarias con el propósito de posibilitar el desarrollo y la ejecución de los programas de desarrollo ambiental, turístico, ecológico y pesquero para los propósitos de la presente ley.</p> <p>Parágrafo 2. Las autorizaciones otorgadas al Gobierno nacional en virtud de esta ley, se incorporarán de conformidad con lo establecido en el presente artículo, en primer lugar, reasignando los recursos hoy existentes en cada órgano ejecutor, sin que ello implique un aumento del presupuesto. En segundo lugar, de acuerdo con las disponibilidades que se produzcan en cada vigencia fiscal.</p>	<p><u>y conforme a lo establecido en los artículos 288, 334, 341 y 345 de la Constitución Política, las competencias establecidas en la Ley 715 de 2001 y sus decretos reglamentarios, Decreto número 111 de 1996 y la Ley 819 de 2003, el Gobierno nacional y los gobiernos territoriales quedan autorizados para impulsar a través del Sistema Nacional de Cofinanciación las apropiaciones necesarias con el propósito de posibilitar el desarrollo y la ejecución de los programas de desarrollo ambiental, turístico, ecológico y pesquero para los propósitos de la presente ley.</u></p> <p><u>Parágrafo 2.</u> Las autorizaciones otorgadas al Gobierno nacional en virtud de esta ley, se incorporarán de conformidad con lo establecido en el presente artículo, en primer lugar, reasignando los recursos</p>	
<p>hoy existentes en cada órgano ejecutor, sin que ello implique un aumento del presupuesto. En segundo lugar, de acuerdo con las disponibilidades que se produzcan en cada vigencia fiscal.</p> <p><u>Artículo 5°.</u> El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, en el marco de sus competencias, realizarán las acciones necesarias para apoyar, capacitar, brindar asesoría y acompañamiento a la población y autoridades que promuevan y desarrollen programas ambientales, turísticos, ecológicos y pesqueros dentro de la zona de influencia del Embalse del Guájaro.</p>	<p><u>Artículo 5° 6°.</u> Para contribuir al fomento del</p>	<p>El contenido del artículo permanece igual.</p>	<p>proyectos ambientales, turísticos, ecológicos y pesqueros dentro del Embalse del Guájaro, se autoriza al Gobierno Nacional en coordinación con el Departamento del Atlántico y los municipios de Sabanalarga, Repelón, Manatí y Luruaco para que de conformidad con sus funciones constitucionales y legales incorporen dentro sus presupuestos las apropiaciones y recursos necesarios para fomentar el desarrollo de proyectos turísticos, ecológicos y pesqueros dentro del Embalse del Guájaro.</p> <p>Parágrafo 1. A partir de la sanción de la presente ley y conforme a lo establecido en los artículos 288, 334, 341 y 345 de la Constitución Política, las competencias establecidas en la Ley 715 de 2001 y sus decretos reglamentarios, Decreto número 111 de 1996 y la Ley 819 de 2003, el Gobierno nacional y los gobiernos territoriales quedan autorizados para impulsar a través del Sistema Nacional de Cofinanciación las</p>	<p>desarrollo de los proyectos ambientales, turísticos, ecológicos y pesqueros dentro del Embalse del Guájaro, se autoriza al Gobierno Nacional en coordinación con el Departamento del Atlántico y los municipios de Sabanalarga, Repelón, Manatí y Luruaco para que de conformidad con sus funciones constitucionales y legales incorporen dentro sus presupuestos las apropiaciones y recursos necesarios para fomentar el desarrollo de proyectos turísticos, ambientales, ecológicos y pesqueros dentro del Embalse del Guájaro.</p> <p>Parágrafo 1. A partir de la sanción de la presente ley y conforme a lo establecido en los artículos 288, 334, 341 y 345 de la Constitución Política, las competencias establecidas en la Ley 715 de 2001 y sus decretos reglamentarios, Decreto número 111 de 1996 y la</p>	<p>Se asigna nueva numeración considerando el cambio de numeración por la inclusión de un nuevo artículo.</p>
<p>Artículo 5°. Para contribuir al fomento del desarrollo de los</p>					

<p>apropiaciones necesarias con el propósito de posibilitar el desarrollo y la ejecución de los programas de desarrollo ambiental, turístico, ecológico y pesquero para los propósitos de la presente ley. Parágrafo 2. Las autorizaciones otorgadas al Gobierno nacional en virtud de esta ley, se incorporarán de conformidad con lo establecido en el presente artículo, en primer lugar, reasignando los recursos hoy existentes en cada órgano ejecutor, sin que ello implique un aumento del presupuesto. En segundo lugar, de acuerdo con las disponibilidades que se produzcan en cada vigencia fiscal.</p>	<p>Ley 819 de 2003, el Gobierno nacional y los gobiernos territoriales quedan autorizados para impulsar a través del Sistema Nacional de Cofinanciación las apropiaciones necesarias con el propósito de posibilitar el desarrollo y la ejecución de los programas de desarrollo ambiental, turístico, ecológico y pesquero para los propósitos de la presente ley. Parágrafo 2. Las autorizaciones otorgadas al Gobierno nacional en virtud de esta ley, se incorporarán de conformidad con lo establecido en el presente artículo, en primer lugar, reasignando los recursos hoy existentes en cada órgano ejecutor, sin que ello implique un aumento del presupuesto. En segundo lugar, de acuerdo con las disponibilidades que se produzcan en cada vigencia fiscal.</p>	
---	--	--

<p>Artículo 6°. La presente ley rige a partir de su sanción y promulgación</p>	<p>Artículo 6°-7°. La presente ley rige a partir de su sanción y promulgación</p>	<p>El contenido del artículo permanece igual. Se asigna nueva numeración considerando el cambio de numeración por la inclusión de un nuevo artículo.</p>
---	--	---

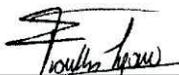
6. PROPOSICIÓN

Con fundamento en lo anteriormente expuesto y habiendo señalado las principales modificaciones al articulado del Proyecto de Ley No. 639 de 2021 Cámara, 346 de 2020 Senado., **“Por medio del cual se declara zona de interés ambiental, turístico y ecológico al Embalse del Guájaro en el Departamento del Atlántico, se reconoce su potencial pesquero y se dictan otras disposiciones”**, consideramos viable su discusión en la Comisión Quinta Constitucional y solicitamos a la Comisión aprobar en primer debate el proyecto de Ley junto con el texto propuesto.

De los honorables congresistas,


ALONSO JOSÉ DEL RÍO CABARCAS
Representante a la Cámara por Bolívar
Partido de la U
Ponente Coordinador


KAREN VIOLETTE CURE CORCIONE
Representante a la Cámara por Bolívar
Partido Cambio Radical
Ponente


FRANKLIN DEL CRISTO LOZANO DE LA OSSA
Representante a la Cámara por Magdalena
Partido Opción Ciudadana
Ponente

TEXTO PROPUESTO PARA PRIMER DEBATE

PROYECTO DE LEY NO. 639 DE 2021 CÁMARA, 346 DE 2020 SENADO: “POR MEDIO DEL CUAL SE DECLARA ZONA DE INTERÉS AMBIENTAL, TURÍSTICO, ECOLÓGICO Y PESQUERO AL EMBALSE DEL GUÁJARO EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO, SE RECONOCE SU POTENCIAL PESQUERO Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”

EI CONGRESO DE COLOMBIA DECRETA:

Artículo 1°. Declárese zona de interés ambiental, turístico, ecológico y pesquero al Embalse del Guájaro ubicado entre los municipios de Sabanalarga, Repelón, Manatí y Luruaco en el departamento del Atlántico.

Artículo 2°. Se autoriza al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para que destine los recursos necesarios al desarrollo de programas, planes y/o proyectos de inversión, destinados a la recuperación, protección y conservación del ecosistema con que cuenta el Embalse del Guájaro, así como la recuperación paisajística de su entorno, la conservación de la flora, fauna y todas las especies de animales que habitan la zona, promoviendo el crecimiento adecuado y sostenible de las poblaciones acuáticas, ribereñas y/o asociadas a cuerpos de agua.

Artículo 3°. Se autoriza al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo para que incluya dentro de sus programas de desarrollo e infraestructura de ecoturismo, agroturismo y acuaturismo, los proyectos de inversión que permitan e incentiven un desarrollo turístico y comercial sostenible del Embalse del Guájaro, así mismo, dentro del marco de sus competencias, incluir planes, programas y/o proyectos, que puedan aportar al fortalecimiento de los aspectos ambientales, ecológicos y pesqueros del embalse.

Artículo 4°. Se autoriza al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural para que promueva y ejecute planes, programas y/o proyectos de inversión que desarrollen la actividad pesquera y acuícola de una manera sostenible, que a su vez permita la organización de esta actividad garantizando el mantenimiento de los recursos pesqueros del embalse.

El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural garantizará en el proceso de concertación de los planes, programas y/o proyectos que beneficien y desarrollen la actividad pesquera en el Embalse del Guájaro, la participación de la población pesquera que de manera individual u organizada en asociaciones y/o cooperativas realizan esta actividad en la zona de influencia del embalse del Guájaro.

Artículo 5°. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, en el marco de sus competencias, realizarán las acciones necesarias para apoyar, capacitar, brindar asesoría y acompañamiento a la población y autoridades que promuevan y desarrollen programas ambientales, turísticos, ecológicos y pesqueros dentro de la zona de influencia del Embalse del Guájaro.

Artículo 6°. Para contribuir al fomento del desarrollo de los proyectos ambientales, turísticos, ecológicos y pesqueros dentro del Embalse del Guájaro, se autoriza al Gobierno Nacional en coordinación con el Departamento del Atlántico y los municipios de Sabanalarga, Repelón, Manatí y Luruaco para que de conformidad con sus funciones constitucionales y legales incorporen dentro sus presupuestos las apropiaciones y recursos necesarios para fomentar el desarrollo de proyectos turísticos, ambientales, ecológicos y pesqueros dentro del Embalse del Guájaro.

Parágrafo 1. A partir de la sanción de la presente ley y conforme a lo establecido en los artículos 288, 334, 341 y 345 de la Constitución Política, las competencias establecidas en la Ley 715 de 2001 y sus decretos reglamentarios, Decreto número 111 de 1996 y la Ley 819 de 2003, el Gobierno nacional y

los gobiernos territoriales quedan autorizados para impulsar a través del Sistema Nacional de Cofinanciación las apropiaciones necesarias con el propósito de posibilitar el desarrollo y la ejecución de los programas de desarrollo ambiental, turístico, ecológico y pesquero para los propósitos de la presente ley.

Parágrafo 2. Las autorizaciones otorgadas al Gobierno nacional en virtud de esta ley, se incorporarán de conformidad con lo establecido en el presente artículo, en primer lugar, reasignando los recursos hoy existentes en cada órgano ejecutor, sin que ello implique un aumento del presupuesto. En segundo lugar, de acuerdo con las disponibilidades que se produzcan en cada vigencia fiscal.

Artículo 7º. La presente ley rige a partir de su sanción y promulgación.

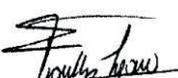
De los honorables congresistas,



ALONSO JOSÉ DEL RÍO CABARCAS
Representante a la Cámara por Bolívar
Partido de la U
Ponente Coordinador



KAREN VIOLETTE CÚRE CORCIONE
Representante a la Cámara por Bolívar
Partido Cambio Radical
Ponente



FRANKLIN DEL CRISTO LOZANO DE LA OSSA
Representante a la Cámara por Magdalena
Partido Opción Ciudadana
Ponente

**PONENCIA PARA SEGUNDO DEBATE AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 621 DE 2021
CÁMARA – 96 2020 SENADO**

*por medio del cual se garantiza la operación del Programa de Alimentación Escolar (PAE)
durante todo el año.*

<p>INFORME DE PONENCIA PARA SEGUNDO DEBATE</p> <p>Proyecto de ley No. 621 de 2021 Cámara – 096 2020 Senado “POR MEDIO DEL CUAL SE GARANTIZA LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR – PAE – DURANTE TODO EL AÑO”</p> <p>I. ANTECEDENTES Y TRÁMITE DEL PROYECTO</p> <p>El proyecto de ley No. 621 de 2021 Cámara – 096 2020 Senado “POR MEDIO DEL CUAL SE GARANTIZA LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR – PAE – DURANTE TODO EL AÑO” es de autoría de el exsenador Álvaro Uribe Vélez; la Senadora Ruby Helena Chagüi Spath, quien firma la presente ponencia, Esteban Quintero Cardona, entre otros. La iniciativa fue radicada en el Senado de la República y allí tuvo su primer y segundo debate. La misma se remitió a la Cámara de Representantes para su primer debate en la Comisión Sexta Constitucional Permanente de la Cámara y se me designó como ponente el día 01 de junio del mismo año. Adicionalmente, me notifiqué como ponente ese mismo día. El proyecto fue publicado en la Gaceta No. 450 de 2021. Seguido de esto, el proyecto cursó su primer debate en la comisión sexta de Cámara y posteriormente se creó una subcomisión para revisar diversos aportes al mismo. Finalmente, la presente ponencia está construida con base en lo planteado en dicho informe de la subcomisión.</p> <p>II. OBJETO Y JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO</p> <p>El proyecto de ley en cuestión pretende establecer los lineamientos generales para garantizar la prestación del servicio de alimentación escolar durante el calendario escolar, asegurando la concurrencia efectiva coordinada, articulada y conjunta de los recursos a cargo de la Nación, los departamentos y los municipios.</p> <p>III. CONTENIDO DE LA INICIATIVA</p> <p>a) Estructura del proyecto</p> <p>El proyecto de ley se encuentra integrado por cuatro (04) artículos, además del título. Dentro de estos se encuentra el objeto; el desarrollo de la iniciativa y la vigencia de la misma.</p>	<p>b) Consideraciones del proyecto¹</p> <p>El Programa de Alimentación Escolar tiene como fuentes de financiación aquellos recursos públicos y privados, del orden nacional y territorial, de destinación específica y de libre destinación, procedentes del Presupuesto General de la Nación, del Sistema General de Participaciones y del Sistema Nacional de Regalías, así como recursos propios de las Entidades Territoriales.</p> <p>El Programa de Alimentación Escolar es una estrategia esencial para garantizar el derecho fundamental a la educación en sus componentes de acceso con permanencia, de los niños, niñas, jóvenes y adolescentes (en especial de aquellos en situaciones de especial vulnerabilidad).</p> <p>Esta estrategia se enfrenta a grandes desafíos particularmente relacionados con la oportunidad en la concurrencia de las diferentes fuentes de recursos para permitir la planeación de la prestación del servicio de forma eficiente y eficaz, garantizando durante el período de trabajo académico la continuidad de la prestación del servicio de alimentación escolar.</p> <p>La naturaleza diversa de las fuentes de financiación hace que los fondos no estén disponibles en un mismo momento, a lo cual se suman las dificultades que pueden darse en territorio, en la asignación de recursos (los cuales usualmente están sujetos al ejercicio político de los concejos municipales o asambleas departamentales), lo cual se traduce en complicaciones para la planeación y contratación del servicio. En consecuencia, se generan contrataciones parciales que afectan la continuidad y oportunidad del servicio durante el calendario académico, en detrimento de los intereses de los beneficiarios y desgastando administrativamente a las entidades responsables del PAE en la preparación de dos o más procesos contractuales, desconociendo principios rectores de la contratación estatal y de la función pública.</p> <p>Otra dificultad que enfrenta el PAE es la falta de interés de los operadores por los plazos cortos de los contratos lo cual genera mayores inversiones y costos administrativos, además no permite procesos de mejoramiento continuo.</p> <p><small>¹ Tomadas de doc. informativo de la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar Alimentos para Aprender.</small></p>
--	--

El ordenamiento colombiano tiene normas que refieren a la ejecución oportuna del Programa de Alimentación Escolar, así como a la ejecución durante el calendario escolar, lo cierto es que, si no se atienden las dificultades relacionadas con la oportunidad en la asignación y giro de los recursos, se ve afectada la planeación y contratación, y no es posible lograr el cumplimiento de tales preceptos legales, en beneficio de los niños, niñas, jóvenes y adolescentes.

En este orden de ideas, el Gobierno propende por que la cobertura del programa año tras año sea mayor, así las cosas sea previsto que para el 2021 se tiene prevista una cobertura de 6.469.000 y para el 2022 una población beneficiaria de 7.000.000 estudiantes, lo que se logrará, con herramientas claras, que permitan un inicio del programa con toda la planeación oportuna que esto demanda; esto sin dejar de lado que estamos en una gradualidad de lo que será la implementación total al programa denominado Jornada Única que trae consigo los componentes de alimentación escolar e infraestructura educativa, correspondientes.

Así las cosas, es de suma importancia tener una norma que regule de manera clara y oportuna, la concurrencia de los recursos que financian el PAE, tanto de los asignados y girados por la Nación, departamentos, distritos y municipio, quienes participan de forma coordinada, articulada y conjunta, para atender el programa. Es por ello que estas entidades deben asegurar la disponibilidad de recursos por períodos de por lo menos dos años consecutivos del calendario escolar y gestionar la planeación y administración de los contratos y convenios para el efecto, con la posibilidad de extenderlos por un año adicional.

Además de los asuntos presupuestales y de contratación oportuna, hay un desafío relacionado con la prestación del servicio en las zonas rurales, en las cuales hay condiciones particulares relativas al número de estudiantes, tradiciones y costumbres alimenticias y dificultades de acceso. Por esta razón, es necesario buscar alternativas que garanticen la prestación del servicio en óptimas condiciones facilitando la ejecución del programa por parte de los padres de familia, siempre que hayan manifestado su interés y que cumplan con el lleno de los requisitos y lineamientos del PAE.

Este proyecto de artículo está diseñado para la ruralidad como excepcionalidad, es decir en aquellas zonas rurales en las cuales el número de estudiantes es bajo, las condiciones de acceso a servicios públicos y de transporte generan restricciones y riesgos para la prestación del servicio a través de operadores de acuerdo con el estatuto de contratación pública.

Esta atención diferenciada permite además impulsar los desarrollos locales, aumentar el consumo con circuitos cortos de comercialización y empoderar a los padres. Es importante tener en cuenta que este proyecto de ley no tiene impacto fiscal alguno, pues no prevé costos adicionales a los ya existentes y asumidos por quienes financian el Programa de Alimentación Escolar. Lo que busca el proyecto de ley es una asignación oportuna, para lo que debe establecerse un procedimiento que conlleve a la oportunidad de asignación presupuestal, y con una operatividad que refleje la atención por largos períodos que beneficie a los operadores y beneficiarios y sin interrupciones de esta estrategia de permanencia².

Este proyecto busca:

1. Garantizar estabilidad en la prestación de servicio durante toda la vigencia, al poderse planear y contratar el calendario académico completo, asegurando de paso mejores condiciones de calidad.
2. Garantizar que el proceso de planeación inicie con suficientes meses de anticipación, para que por más inconvenientes que se tengan en un proceso contractual, se cuente con margen adecuado para resolver y prestar el servicio con oportunidad.
3. Garantizar que ninguna de las partes aportantes pueda reducir su aporte de una vigencia a otra, con lo cual la planeación financiera puede hacerse incluso con más de una vigencia, pues no requiere esperar a que se determine el monto asignado para poder iniciar proceso contractual.
4. Generar una nueva opción de atención diferenciada para la ruralidad, con mayor participación de las asociaciones de padres de familia (debidamente constituidas) en su operación y consecuente aumento del consumo local.

IV. PLIEGO DE MODIFICACIONES

² Tomado de doc. informativo de la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar Alimentos para Aprender.

Texto aprobado en primer debate en la Cámara de Representantes	Texto propuesto para segundo debate en la Cámara de Representantes	Justificación
Artículo 3. Transferencias a los Fondos de Servicios Educativos. Autorícese a las entidades territoriales encargadas de la prestación del servicio de alimentación escolar, a realizar transferencias a los Fondos de Servicios Educativos de los establecimientos educativos para la prestación del servicio de alimentación escolar cuando (i) los estudiantes del establecimiento educativo son en su mayoría población rural; y (ii) la asociación de padres de familia ha manifestado su interés de encargarse de la prestación del servicio con el cumplimiento de los requisitos del programa. En este caso, los directivos docentes competentes podrán ordenar los gastos necesarios para la prestación del servicio con cargo a las transferencias destinadas específicamente a la alimentación escolar, siguiendo los lineamientos establecidos por la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar – Alimentos para Aprender – o quien haga sus veces.	<u>Artículo 3. Transferencias a los Fondos de Servicios Educativos. Autorícese a las entidades territoriales encargadas de la prestación del servicio de alimentación escolar, a realizar transferencias a los Fondos de Servicios Educativos de los establecimientos educativos para que se ejecute con los padres de familia la prestación del servicio de alimentación escolar cuando (i) los estudiantes del establecimiento educativo sean en su mayoría población rural; y (ii) la asociación de padres de familia haya manifestado su interés de encargarse de la prestación del servicio con el cumplimiento de los requisitos del programa. En este caso, los directivos docentes competentes podrán ordenar los gastos necesarios para la prestación del servicio con cargo a las transferencias destinadas específicamente a la alimentación escolar, siguiendo los lineamientos establecidos por la Unidad Administrativa Especial de</u>	En primer lugar, el Programa de Alimentación Escolar tiene fuentes de financiación pública y privada, recursos que deben procurarse en buena medida y a favor de los mas necesitados, en el caso de la alimentación escolar es un programa destinado para los niños y niñas de nuestras instituciones educativas, garantizándoles su derecho fundamental a la educación en conexidad con el derecho a la vida digna y a recibir una alimentación básica para su mínimo vital, en especial a los jóvenes de graves situaciones y especial vulnerabilidad. Se propone la adición de este párrafo con el fin de ejercer un control de primera mano por parte de los padres de familia y los docentes, quienes conviven a diario con los menores, teniendo conocimiento pleno si los mismos reciben su alimentación todos los días, que tipo de alimentos reciben, en que cantidad los reciben y en que estado se encuentran los mismos, con el fin de proteger a los menores de una

Alimentación Escolar – Alimentos para Aprender – o quien haga sus veces.	mala alimentación, esto debido a tantas denuncias públicas que se han presentado en los noticieros y redes sociales, atribuyéndoles un poder especial para que los padres y los docentes en consenso puedan ser garantes de estos programas. Por su parte, se insta al Gobierno Nacional para que reglamente en un término no mayor a 6 meses la capacitación a las Asociaciones de Padres de Familia y a las Juntas de Acción Local que asuman la prestación del servicio PAE.
PARÁGRAFO 1. Teniendo en cuenta que la transferencia se efectuará a los Fondos de Servicios Educativos, su proceso de ejecución, seguimiento y control será el previsto en la ley 715 de 2001 y Decreto 4791 de 2008; así mismo en la ejecución del programa se aplicarán los mecanismos de control de calidad e inocuidad que le corresponden a las entidades territoriales con sus equipos técnicos, supervisión y/o interventoría. Como la asociación de padres o junta comunal del lugar de la sede pasa a ser operador, debe generarse otra instancia de participación y control social según se reglamente por la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar – Alimentos para Aprender – o quien haga sus veces.	
Parágrafo 2. En todo caso la asociación de padres de familia y los docentes tendrán acceso completo a la documentación que soporta las transferencias de los recursos, la contratación y el	

	<p>cumplimiento del plan de alimentación, con el fin de ejercer control directamente a los prestadores del servicio de alimentación escolar en aras de la protección de los estudiantes, y en caso de encontrar irregularidades podrán acudir ante el Fondo de Servicios Educativos y el representante legal de la institución educativa para que en un término no mayor a 15 días verifique y se pronuncie sobre dichas irregularidades, en caso de encontrarse hallazgo negativo se deberá iniciar forzosamente el respectivo proceso para la suspensión o terminación del contrato según corresponda.</p> <p>Parágrafo 3. La Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar – Alimentos para Aprender – o quien haga sus veces, reglamentará en un término no mayor a seis (6) meses contados a partir de la promulgación de la ley, la capacitación a las Asociaciones de Padres de Familia y las Juntas de Acción Local que asuman la prestación del servicio de alimentación en los siguientes temas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menús: constitución, 	
--	--	--

	<p>preparaciones, calidad.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Manejo y manipulación de alimentos • Alternativas de control social a la prestación del servicio • Programa de Alimentación Saludable en zonas rurales <p>Lo anterior, con el fin de garantizar los principios de Corresponsabilidad, Cofinanciación, Bolsa Común, Articulación de actores, la calidad y pertinencia en la prestación del servicio en los establecimientos educativos mencionados en el presente artículo.</p> <p>Parágrafo 4. La Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar – Alimentos para Aprender – o quien haga sus veces, reglamentará en un término no mayor a seis (6) meses contados a partir de la promulgación de la ley, los mecanismos e instancias complementarias para garantizar el control social al Programa de Alimentación Escolar en aquellas Instituciones y Sedes Educativas que se acocjan a lo dispuesto en el presente artículo, con el fin de</p>	
--	--	--

	<p>garantizar la veeduría ciudadana establecida en la Ley 2042 de 2020 y otras disposiciones, lo anterior será verificado y acompañado por las respectivas Personerías municipales.</p>	
<p>Artículo nuevo</p>	<p>Autorícese al Gobierno Nacional para que en el término de seis (6) meses reglamente lo relacionado con la presente ley.</p>	

V. ANÁLISIS SOBRE POSIBLES CONFLICTOS DE INTERÉS

De acuerdo con lo ordenado en el artículo 3º de la Ley 2003 de 2019, en concordancia con los artículos 286 y 291 de la Ley 5 de 1992 (Reglamento del Congreso), y conforme con el objetivo de la presente iniciativa, los congresistas que tengan algún interés reglamentado en el sector, se deben declarar impedidos.

Sin embargo, es necesario aclarar que, el conflicto de interés es un tema especial e individual en el que cada congresista debe analizar si lo contenido en el proyecto puede generarle una situación particular que le lleve a presentar un impedimento.

VI. PROPOSICIÓN

En mérito de lo expuesto, rindo ponencia positiva y solicito a los Honorables Representantes de la plenaria de la Cámara de Representantes dar segundo Debate al proyecto de ley No. 621 de 2021 Cámara – 096 2020 Senado “POR MEDIO DEL CUAL SE GARANTIZA LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR – PAE – DURANTE TODO EL AÑO”, con las modificaciones propuestas.

Cordialmente,


 ESTEBAN QUINTERO CARDONA
 Representante a la Cámara
 Ponente

TEXTO PROPUESTO PARA SEGUNDO DEBATE PROYECTO DE LEY NO. 621 DE 2021 CÁMARA – 096 2020 SENADO

“POR MEDIO DEL CUAL SE GARANTIZA LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR – PAE – DURANTE EL CALENDARIO ACADÉMICO” EL CONGRESO DE COLOMBIA DECRETA

Artículo 1. Objeto. Establecer los lineamientos generales para garantizar la prestación del servicio de alimentación escolar durante el calendario académico, asegurando la concurrencia efectiva coordinada, articulada y conjunta de los recursos a cargo de la Nación, los distritos, los departamentos y los municipios.

Artículo 2. Garantía de Suministro Oportuno. El Gobierno Nacional, los distritos, los departamentos y los municipios, respetando los principios de planeación presupuestal contenidos en el ordenamiento jurídico colombiano, deben asegurar la disponibilidad de recursos por periodos iguales o superiores al calendario académico. Las entidades competentes gestionarán la planeación y administración de los contratos y convenios, a fin de garantizar la operación oportuna del programa. El Gobierno Nacional reglamentará la materia.

Parágrafo 1. Las entidades territoriales certificadas deberán adelantar la planeación con tiempo suficiente, así como los trámites administrativos, contractuales y presupuestales necesarios, para lograr que el servicio de alimentación escolar se brinde desde el primer día y sin interrupción durante las 40 semanas de trabajo académico. Para tal efecto, deben acudir a la autorización de vigencias futuras o a cualquier otra herramienta contenida en el ordenamiento jurídico para lograr la prestación del servicio en la oportunidad debida. Así mismo, las entidades territoriales certificadas, deben atender las condiciones particulares de ubicación e infraestructura de las instituciones educativas, y las tradiciones y costumbres alimenticias de cada región.

<p>Parágrafo 2. El Programa de Alimentación Escolar es un servicio del sector educativo público de importancia estratégica; en consecuencia, las asignaciones presupuestales para este servicio, con cargo a cada uno de sus aportantes, deberán incrementarse en términos reales en relación con las anteriores vigencias.</p> <p>Parágrafo 3. En las instituciones educativas establecidas en territorios conformados por etnias de indígenas, negritudes, afros, raizales o palenqueros, debidamente reconocidos por el ministerio del interior, la elaboración de la minuta nutricional del PAE se debe hacer de forma concertada con las respectivas comunidades.</p> <p>Artículo 3. Transferencias a los Fondos de Servicios Educativos. Autorícese a las entidades territoriales encargadas de la prestación del servicio de alimentación escolar, a realizar transferencias a los Fondos de Servicios Educativos de los establecimientos educativos para que se ejecute con los padres de familia la prestación del servicio de alimentación escolar cuando (i) los estudiantes del establecimiento educativo sean en su mayoría población rural; y (ii) la asociación de padres de familia haya manifestado su interés de encargarse de la prestación del servicio con el cumplimiento de los requisitos del programa. En este caso, los directivos docentes competentes podrán ordenar los gastos necesarios para la prestación del servicio con cargo a las transferencias destinadas específicamente a la alimentación escolar, siguiendo los lineamientos establecidos por la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar – Alimentos para Aprender – o quien haga sus veces.</p> <p>Parágrafo 1. Teniendo en cuenta que la transferencia se efectuará a los Fondos de Servicios Educativos, su proceso de ejecución, seguimiento y control será el previsto en la ley 715 de 2001 y Decreto 4791 de 2008; así mismo en la ejecución del programa se aplicarán los mecanismos de control de calidad e inocuidad que le corresponden a las entidades territoriales con sus equipos técnicos, supervisión y/o interventoría. Como la asociación de padres o junta comunal del lugar de la sede pasa a ser operador, debe generarse otra instancia de participación y control social según se reglamente por la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar – Alimentos para Aprender – o quien haga sus veces.</p> <p>Parágrafo 2. En todo caso la asociación de padres de familia y los docentes tendrán acceso completo a la documentación que soporta las transferencias de los recursos, la contratación y el cumplimiento del plan de alimentación, con el fin de ejercer control directamente a los prestadores del servicio de alimentación escolar en aras de la protección de los estudiantes, y en caso de encontrar irregularidades podrán acudir ante el Fondo de Servicios Educativos y el representante legal de la</p>	<p>institución educativa para que en un término no mayor a 15 días verifique y se pronuncie sobre dichas irregularidades, en caso de encontrarse hallazgo negativo se deberá iniciar forzosamente el respectivo proceso para la suspensión o terminación del contrato según corresponda.</p> <p>Parágrafo 3. La Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar – Alimentos para Aprender – o quien haga sus veces, reglamentará en un término no mayor a seis (6) meses contados a partir de la promulgación de la ley, la capacitación a las Asociaciones de Padres de Familia y las Juntas de Acción Local que asuman la prestación del servicio de alimentación en los siguientes temas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menús: constitución, preparaciones, calidad. • Manejo y manipulación de alimentos • Alternativas de control social a la prestación del servicio • Programa de Alimentación Saludable en zonas rurales <p>Lo anterior, con el fin de garantizar los principios de Corresponsabilidad, Cofinanciación, Bolsa Común, Articulación de actores, la calidad y pertinencia en la prestación del servicio en los establecimientos educativos mencionados en el presente artículo.</p> <p>Parágrafo 4. La Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar – Alimentos para Aprender – o quien haga sus veces, reglamentará en un término no mayor a seis (6) meses contados a partir de la promulgación de la ley, los mecanismos e instancias complementarias para garantizar el control social al Programa de Alimentación Escolar en aquellas Instituciones y Sedes Educativas que se acojan a lo dispuesto en el presente artículo, con el fin de garantizar la veeduría ciudadana establecida en la Ley 2042 de 2020 y otras disposiciones, lo anterior será verificado y acompañado por las respectivas Personerías municipales.</p> <p>Artículo 4. Autorícese al Gobierno Nacional para que en el término de seis (6) meses reglamente lo relacionado con la presente ley.</p> <p>Artículo 5. La presente ley rige a partir de la fecha de su publicación.</p> <p> ESTEBÁN QUINTERO CARDONA Representante a la Cámara Ponente</p>
<p style="text-align: center;">TEXTO APROBADO EN PRIMER DEBATE POR LA COMISIÓN SEXTA CONSTITUCIONAL PERMANENTE DE LA HONORABLE CÁMARA DE REPRESENTANTES EN SESIÓN DEL DÍA DIEZ (10) DE AGOSTO DE 2021, AL PROYECTO DE LEY No. 621 de 2021 CÁMARA - 096 de 2020 SENADO</p> <p style="text-align: center;">“POR MEDIO DEL CUAL SE GARANTIZA LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR – PAE – DURANTE EL CALENDARIO ACADÉMICO”</p> <p style="text-align: center;">EL CONGRESO DE COLOMBIA DECRETA</p> <p>Artículo 1. Objeto. Establecer los lineamientos generales para garantizar la prestación del servicio de alimentación escolar durante el calendario académico, asegurando la concurrencia efectiva coordinada, articulada y conjunta de los recursos a cargo de la Nación, los distritos, los departamentos y los municipios</p> <p>Artículo 2. Garantía de Suministro Oportuno. El Gobierno Nacional, los distritos, los departamentos y los municipios, respetando los principios de planeación presupuestal contenidos en el ordenamiento jurídico colombiano, deben asegurar la disponibilidad de recursos por periodos iguales o superiores al calendario académico. Las entidades competentes gestionarán la planeación y administración de los contratos y convenios, a fin de garantizar la operación oportuna del programa. El Gobierno Nacional reglamentará la materia.</p> <p>Parágrafo 1. Las entidades territoriales certificadas deberán adelantar la planeación con tiempo suficiente, así como los trámites administrativos, contractuales y presupuestales necesarios, para lograr que el servicio de alimentación escolar se brinde desde el primer día y sin interrupción durante las 40 semanas de trabajo académico. Para tal efecto, deben acudir a la autorización de vigencias futuras o a cualquier otra herramienta contenida en el ordenamiento jurídico para lograr la prestación del servicio en la oportunidad debida. Así mismo, las entidades territoriales certificadas, deben atender las condiciones particulares de ubicación e infraestructura de las instituciones educativas, y las tradiciones y costumbres alimenticias de cada región.</p>	<p>Parágrafo 2. El Programa de Alimentación Escolar es un servicio del sector educativo público de importancia estratégica; en consecuencia, las asignaciones presupuestales para este servicio, con cargo a cada uno de sus aportantes, deberán incrementarse en términos reales en relación con las anteriores vigencias.</p> <p>Parágrafo 3. En las instituciones educativas establecidas en territorios conformados por etnias de indígenas, negritudes, afros, raizales o palenqueros, debidamente reconocidos por el ministerio del interior, la elaboración de la minuta nutricional del PAE se debe hacer de forma concertada con las respectivas comunidades.</p> <p>Artículo 3. Transferencias a los Fondos de Servicios Educativos. Autorícese a las entidades territoriales encargadas de la prestación del servicio de alimentación escolar, a realizar transferencias a los Fondos de Servicios Educativos de los establecimientos educativos para la prestación del servicio de alimentación escolar cuando (i) los estudiantes del establecimiento educativo son en su mayoría población rural; y (ii) la asociación de padres de familia ha manifestado su interés de encargarse de la prestación del servicio con el cumplimiento de los requisitos del programa. En este caso, los directivos docentes competentes podrán ordenar los gastos necesarios para la prestación del servicio con cargo a las transferencias destinadas específicamente a la alimentación escolar, siguiendo los lineamientos establecidos por la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar – Alimentos para Aprender – o quien haga sus veces.</p> <p>Artículo 4. La presente ley rige a partir de la fecha de su publicación</p>

CONTENIDO

Gaceta número 1521 - Viernes 22 de octubre de 2021
CÁMARA DE REPRESENTANTES

PONENCIAS

Ponencia para primer debate, pliego de modificaciones y texto propuesto al proyecto de ley número 152 de 2021 Cámara, por medio del cual se dictan disposiciones para incentivar alivios para empresas y contribuir a la reactivación económica..... 1

Informe de ponencia para primer debate, pliego de modificaciones y texto propuesto al proyecto de ley número 639 de 2021 Cámara, 346 de 2020 Senado, por medio del cual se declara zona de interés ambiental, turístico y ecológico al Embalse del Guájaro en el Departamento del Atlántico, se reconoce su potencial pesquero y se dictan otras disposiciones..... 11

Ponencia para segundo debate, pliego de modificaciones, texto propuesto y aprobado en primer debate en la Comisión Sexta al proyecto de ley número 621 de 2021 Cámara – 96 2020 Senado por medio del cual se garantiza la operación del Programa de Alimentación Escolar (PAE) durante todo el año. 19

CAMARA DE REPRESENTANTES. – COMISION SEXTA CONSTITUCIONAL PERMANENTE. 10 de agosto de 2021. – En sesión de la fecha fue aprobado en primer debate y en los términos anteriores el **Proyecto de Ley No. 621 de 2021 Cámara – 096 de 2020 Senado “POR MEDIO DEL CUAL SE GARANTIZA LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR – PAE – DURANTE EL CALENDARIO ACADÉMICO”** (Acta No. 04 de 2021) previo anuncio de su votación en sesión ordinaria del día 03 de agosto de 2021 según Acta No. 03 de 2021; respectivamente, en cumplimiento del artículo 8º del Acto Legislativo 01 de 2003.

Lo anterior con el fin de que el citado proyecto siga su curso legal en segundo debate en la plenaria de la Cámara de Representantes.

RODRIGO ARTURO ROJAS LARA
Presidente



DIANA MARCELA MORALES ROJAS
Secretaría General